

LAS RAÍCES DEL GENOCIDIO: LOS ANTECEDENTES DE LA MILITARIZACIÓN DE LA POLÍTICA Y DE UNA IDEOLOGÍA DEL EXTERMINIO EN ARGENTINA, 1880-1920

Alejandro Andreassi Cieri
Universidad Autónoma de Barcelona

El reciente recuerdo de las atrocidades cometidas por la dictadura militar argentina, entre 1976 y 1983, motivado por las declaraciones públicas de algunos miembros de las fuerzas armadas implicados, ha devuelto al primer plano de la actualidad internacional el período más siniestro y trágico de la historia argentina, tal vez sólo equiparable a la crueldad de las dictaduras coetáneas del Cono Sur, y seguramente equiparable a las consecuencias de la implantación de la dictadura nazi, primero en la propia Alemania y más tarde en la Europa ocupada por sus ejércitos.

Sin embargo, la posición oficial en la actual situación democrática sobre el terrorismo de estado practicado en el período 1976-1983, oscila entre la asunción casi acrítica o justificatoria de lo sucedido con un lenguaje similar al utilizado por las juntas militares, como estas declaraciones a la prensa del ex vice-ministro de Defensa de Menem, Vicente Massot, al día siguiente de las confesiones de Scilingo en un programa de televisión en Buenos Aires

'Desde fines de la década del 60, la Argentina se enfrentó a una guerra de carácter irregular que no declaró la República Argentina, que no declararon sus fuerzas Armadas sino las fuerzas subversivas básicamente de Montoneros y ERP, una guerra sucia solapada con mucha saña en donde básicamente se enfrentaron dos contingentes armados, uno insisto irregular, la guerrilla, y otro las Fuerzas Armadas de la nación. En esa guerra se cometieron por parte de estas últimas más de un exceso como todas las fuerzas armadas del mundo que debieron enfrentar situaciones semejantes cometieron [...] dentro de ese contexto en donde las fuerzas armadas debieron defenderse y defender a la nación argentina se enmarca la participación que le cupo a la Escuela de Mecánica de la Armada en donde según el capitán Scilingo acontecieron los hechos que todos conocemos. Hasta aquí todas las acusaciones que se hicieron sobre la Escuela de Mecánica fueron producto de las denuncias hechas por subversivos que salieron de la misma no torturados, no muertos, sino vivitos y coleando, dicho sea de paso [...]

De la misma manera, no podemos comparar las Fuerzas Armadas con un vulgar conjunto de irregulares muy bien pertrechados, muy bien armados con un aparato sofisticadísimo de superficie, donde no solamente había combatientes sino también profesores universitarios, políticos, periodistas que enderezaron sus armas y su ideología en contra de la nación. Por supuesto que se cometieron excesos pero esos excesos de manera alguna pueden hacer comparable la acción para salvar a la nación de una amenaza como la que llevó a cabo el marxismo y los propios movimientos guerrilleros¹

y la condena, circunscrita a unos pocos culpables, de los métodos empleados, sin cuestionar la destrucción de la democracia de la que fue responsable el conjunto de la institución militar, como expresa el reclamo de Antonio Berhongaray, diputado de la Unión Cívica Radical y miembro de la Comisión de Defensa de la Cámara baja a los actuales jefes del ejército

‘...para que a través de inequívocos pronunciamientos expresen su desaprobación con relación a los hechos denunciados y, en general, a la metodología empleada con motivo de la lucha antiterrorista [lo que permitiría] desvincular a instituciones importantes para el porvenir de nuestra Patria de los errores de quienes no fueron dignos de conducirlos’²

En ambos representantes políticos se observa el interés por salvaguardar la figura de las fuerzas armadas desvinculándola de la instauración de un sistema totalitario del que participaron sin fisuras ocupando hasta los niveles inferiores de la administración estatal, cuyo objetivo era la consolidación de un proyecto social antagónico con los intereses de las clases subalternas, en lo que constituía una verdadera restauración oligárquica.³

Estas declaraciones de representantes políticos del sistema democrático revelan con que profundidad ha calado en las estructuras políticas y en el tejido social la inmanencia de un orden militar como elemento inseparable del funcionamiento del estado y la sociedad argentinas, que implica la supresión de la obligada subordinación de las fuerzas armadas a los mecanismos constitucionales y a la voluntad popular como garantía de un estado democrático y de derecho. La profundidad del compromiso ideológico en última instancia se refleja en el empleo común de términos por representantes del gobierno y la oposición, que delatan la incuestionabilidad de los fines últimos de la dictadura: “guerra sucia” en lugar de “represión”, “errores en los métodos empleados” en lugar de “ilegalidad e ilegitimidad”, “excesos” en lugar de “tortura y asesinato”, “proceso de reconstrucción nacional” en lugar de “dictadura militar”. De este modo la violencia aplicada por los militares es presentada como una reacción excesiva, e incluso perversa, pero siempre como respuesta a una violencia anterior, ejercida por fuerzas políticas antisociales que habrían violado con su actuación la normalidad democrática, las víctimas exculpan a los verdugos. Y lo que es más grave, se la presenta como el resultado de una

1. Página/12, Buenos Aires, 10 de marzo de 1995.

2. Página/12, Buenos Aires, 9 de marzo de 1995.

3. En este sentido uno de los pocos organismos oficiales de la democracia reciente que utiliza el término terrorismo de estado, para denominar al sistema totalitario que implantó la junta militar golpista es la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, ver *Nunca Más. Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas*, Buenos Aires, Eudeba, 1984, pp. 479-482.

agresión "exterior". Se produce una inversión semántica, ya evocada por Julio Cortázar en una memorable conferencia dictada en Madrid en 1981, más apropiada para un universo *orwelliano* que a una democracia efectivamente recuperada.⁴ Esa aceptación del ejército como supremo garante de la continuidad del estado, como un supra partido, no es sólo fruto del terror largamente internalizado y obviamente existente a una nueva interrupción de la democracia y la renovación del período sangriento. Es producto de una experiencia política de larga data, en la que han participado en mayor o menor grado los diferentes grupos políticos incluidos los que ostentan la mayor representación popular, peronistas y radicales, quienes se han resignado a considerarlo como garante de un orden social inalterable, el que, a su vez, es sinónimo de integridad nacional. La persistencia a lo largo de un siglo de un modelo social y económico inalterable, o por lo menos la influencia extraordinaria que en los diversos ámbitos políticos y culturales detenta el reducido grupo social que es su principal beneficiario, ha terminado por consolidar la idea de que la economía abierta basada en las ventajas comparativas -que para Argentina residen en su capacidad competitiva en el ámbito agropecuario- y muy ligada a las economías más dinámicas del capitalismo occidental son el único proyecto posible, que hay que garantizar mediante cualquier recurso y al que hay que subordinar los intereses y necesidades de los grupos sociales subalternos del país. En la actualidad, esta opinión está además refrendada por la abrumadora presencia del neoliberalismo que propone no sólo economías más abiertas a los flujos del capital internacional sino también un desarme progresivo del papel del estado como redistribuidor del ingreso y limitador de las perspectivas de acumulación de los grupos económicos más poderosos, en lo que se ha llamado la discusión sobre la viabilidad del Estado de Bienestar. Por lo tanto podemos hallar observadores externos que coinciden con las visiones sostenidas actualmente en el país, quienes consideran que el fracaso de la Argentina en conseguir un desarrollo sostenido consiste en haberse desviado del curso de la especialización económica fuertemente integrada al mercado internacional y en haber intentado a partir de las décadas de 1930 y 1940 políticas que sustitúan la regulación y asignación de recursos del desarrollo a través del mercado por un "estatismo" que sólo tendía al aislamiento nacional y al atraso y crisis sostenida.⁵ La circunscripción del tratamiento de la

4. Julio Cortázar, «Las palabras violadas», en *Argentina: años de alambradas culturales*, Barcelona, Muchnik Editores, 1984, pp. 63-70.

5. Gabriel Tortella, «Las claves del atraso económico. El caso de Argentina», *Claves de razón práctica*, Madrid, nº 3, junio de 1990, pp. 30-33. Sin embargo este autor no repara en que la vulnerabilidad del desarrollo económico argentino se debió a su extraordinaria dependencia del mercado internacional y sus coyunturas y que las políticas de desarrollo «hacia adentro», que nunca llegaron a ser de desarrollo «desde dentro» parafraseando a Raúl Prebisch, fueron impulsadas como reacción de adaptación y en defensa de sus beneficios por la misma élite social que había impulsado la política exclusivamente agroexportadora del medio siglo anterior a 1930. Sus opiniones fueron ya adelantadas en la década de los sesenta por una obra de historia económica abundantemente citada, ver Carlos Díaz Alejandro, *Ensayos sobre la historia económica argentina*, Buenos Aires, Amorrortu Editores, especialmente pp. 140-142. Para una visión opuesta a las comentadas, cfr. con Miguel Murmis y Juan Carlos Portantiero quienes sostienen que a partir de los años treinta los grupos agrarios dominantes invirtieron directamente en actividades industriales o participaron en ellas a través de grupos financieros que controlaban, o por lo menos consideraron

actuación militar al de la represión en sí misma, sin alcanzar a cuestionar los objetivos y el programa desarrollado por la dictadura militar para los cuales el genocidio fue la principal herramienta de su realización, sugiere una sospechosa compli- cidad con la que los sucesores democráticos de las situaciones dictatoriales se consideran tácitamente herederos y depositarios de los objetivos de reformulación económica y social que constituyeron la base de la interrupción de la continuidad democrática.⁶ Precisamente, numerosos analistas coinciden en señalar que el pro- yecto que alentaba el golpe militar de 1976 pretendía retornar a esa economía abierta basada en el principio de las ventajas comparativas, tan preconizada ac- tualmente, en una nueva coyuntura internacional en la que se volvía, bajo la hege- monía del capitalismo transnacional, a una nueva especialización y división inter- nacional del trabajo, en la cual el eje retornaría al sector agropecuario, generando una redistribución del ingreso y una pauta de acumulación favorable a la burgue- sía terrateniente y el capital más concentrado en los sectores industrial y financie- ro. En ese sentido los ejes básicos del programa de la dictadura militar eran: la equiparación de los precios internos con los internacionales -con lo cual esperab- an obtener una selección "natural" en la que sobrevivirían aquellas empresas competitivas en términos internacionales y desaparecerían las que dependían de subsidios y ayudas derivadas del control de cambios y otros mecanismos estata- les de protección; la depresión salarial permanente -no necesariamente su conge- lación- con el fin de crear un gradiente de acumulación efectivo a favor de las empresas que por el proceso de concentración previo retendrían el control del mercado, y por último la desaparición de la intervención estatal tanto como actor empresario así como regulador de las relaciones económicas y la asignación de recursos, quienes pasarían a depender estrictamente de los mecanismos de mer- cado (la "lógica" del mercado), de los cuales quedarían obviamente excluidos los salarios.⁷

que era necesario un impulso estatal a dichas actividades mientras quedaran supeditadas a las prioridades de sus intereses, *Estudios sobre los orígenes del peronismo*, Buenos Aires, Siglo XXI Editoriales, 1984, pp. 22-25.

6. En un artículo reciente el analista Hermann Tertsch relacionaba el triunfo electoral de Carlos Menem, contra las predicciones de las encuestas, con los efectos que sobre la memoria de los argen- tinos jugaban las brutalidades militares y el éxito del programa neoliberal, aplicado por el minis- tro Cavallo, que también fue un alto funcionario de la dictadura militar, «Menem y la memoria», *El País*, 23 de mayo de 1995.

7. «Los objetivos inmediatos han sido la redistribución de excedentes a favor de la burguesía terrateniente y la elevación de la tasa de ganancia de la burguesía industrial concentrada. Esto puede lograrse solamente con la drástica reducción del salario real y asegurando que su depresión (no necesariamente su baja, sea permanente. La historia inmediatamente anterior demostró que este objetivo sólo puede ser alcanzado en el marco de un Estado fuertemente represivo y la militariza- ción de la sociedad [...]). El modelo contempla entonces como uno de sus aspectos esenciales la promoción de las actividades de exportación. Por una parte se propone ampliar el volumen de las exportaciones agropecuarias incrementando la producción de los renglones tradicionales, incentivando esfuerzos en el desarrollo en gran escala de cultivos con buen nivel de demanda ac- tual, como sorgo y algunas oleaginosas, y en todo caso buscando nuevos mercados. En este punto es destacada la agresiva política de los frigoríficos, fracción industrial estrechamente asociada a los grandes productores ganaderos. Por otra parte, bajo la hegemonía del gran capital agrario se prevé el desarrollo de agroindustrias en gran escala, en un intento por emular a la Argentina «granero del

Por lo tanto, y prescindiendo de una disección profunda del grupo de poder que se constituyó en base a la dictadura militar, que permita establecer con claridad cual de los grupos de la burguesía argentina se benefició más con el golpe militar de 1976 y la política económica y social de la dictadura, es evidente que el objetivo general de la misma era acabar con el poder de negociación de los asalariados, representado por las poderosas organizaciones sindicales, reducir su participación en la renta nacional -hasta extremos sin precedentes en los últimos treinta años- para reiniciar con amplias garantías para los empresarios la recuperación de los beneficios en el marco de una crisis internacional que obligaba a una reestructuración del funcionamiento capitalista que modificaba las pautas de acumulación a nivel local y regional (por ello coincide en poco tiempo con procesos similares en Chile y Uruguay). Para ello era necesario el establecimiento de una férrea disciplina laboral y social así como el desarme de los recursos de resistencia con que habían contado los trabajadores durante décadas. Por otra parte el dismantelamiento de los todavía vigorosos restos de un sistema de protección social estatal, golpeado sucesivas veces desde 1955 pero nunca destruido del todo, era una condición básica descargar esos costes sociales sobre las clases subalternas, y permitir una brutal transferencia de ingresos desde el sector asalariado a los propietarios de bienes de capital.

El neoliberalismo del que hicieron gala las juntas militares, y que bajo cobertura democrática continúa el actual gobierno de Carlos Menem, no es el nuevo enfoque que surge como consecuencia del fracaso del crecimiento hacia dentro basado en la industrialización sustitutiva y en un "excesivo" protagonismo estatal en la modificación de las pautas habituales de inserción en la economía mundial de un país dependiente como Argentina, sino que confluye con la ideología tradicional de los grupos dominantes cuyos intereses se vieron afectados por la política más o menos keynesiana desarrollada durante el primer peronismo y que, bien arraigada por lo menos en cuanto a la práctica e intereses de las organizaciones políticas y sociales de los asalariados, necesitó casi treinta años de ensayos militares y civiles para extinguirse. En el momento en que el desarrollo basado en una intervención estatal

mundo», esta vez como «cocina del mundo», según la definición de un empresario del ramo, o en palabras de Martínez de Hoz [omnipotente ministro de economía de la dictadura y miembro de una de las familias más conspicuas de la élite agropecuaria], enfatizando el desarrollo de industrias «en aquellas áreas donde la Argentina posee evidentes ventajas comparativas a escala internacional» escribía Fernando Porta en 1978, quien calculaba que el salario real había descendido a lo largo de 1976-77 entre un 50 y un 65 por ciento respecto a 1975, ver «Crisis económica y de dominación política en la Argentina contemporánea», en VV.AA., *América Latina en crisis*, Caracas, ILDIS-Universidad Central de Venezuela, 1980, pp. 159 y 178-179; cfr. Aldo Ferrer, «La economía argentina bajo una estrategia «preindustrial», 1976-1980», en A. Rouquié (comp.), *Argentina, hoy*, México D.F., Siglo XXI Editores, 1982, pp. 105-128, quien incluso pone un mayor énfasis en el «viaje en el tiempo» que significaba el programa desarrollado por la dictadura militar al restablecer casi todas las pautas del período dorado de la agroexportación anterior a 1930, quien al referirse al plan desarrollado por el Dr. Schacht de la dictadura, José Martínez de Hoz, escribe que «... si este plan económico sigue adelante sobra más de la mitad de la población del país y la mayor parte del territorio nacional; en un esquema preindustrial, no cabe un país de casi 30 millones de habitantes y cerca de tres millones de kilómetros cuadrados». Ver también Guillermo Hillcoat, *Notas sobre la evolución reciente del capitalismo argentino*, París, CIAL-Université de Paris VIII, 1982.

redistributiva a favor de los sectores sociales más débiles encontró sus límites en las contradicciones internas y en las limitaciones que imponía el mercado mundial, especialmente a partir de la crisis petrolífera de 1973 que inició una reestructuración de las pautas de acumulación a nivel mundial, se aceleró el proceso de recambio político que permitiera dar un vuelco definitivo a favor de las clases propietarias más tradicionales. La forma en que se produjo ese vuelco dependía de la imposibilidad de imponer un giro copernicano al funcionamiento económico y social sin producir grandes resistencias de los sectores asalariados que habían obtenido desde 1946 un protagonismo social y político considerable, y en todo caso superior al obtenido en cualquier otra etapa anterior de la historia argentina. Pero si las capas populares habían aprendido a lo largo de una experiencia de 20 años el valor del papel estatal en defensa de sus intereses frente a los de empresas y grupos propietarios, gracias al persistente recuerdo del período 1946-55 y a la corta pero intensa experiencia democrática iniciada en 1973 donde se había intentado retomar el proceso de crecimiento "desde dentro", no se había modificado la actitud del ejército en cuanto a detectar cuales eran los obstáculos que se interponían a una restauración conservadora, tal como había sucedido en 1930, 1955, 1962 y 1966. Nuevamente asoma el papel "sustitutivo" o complementario de la acción del ejército en relación a un sector de la sociedad civil que es históricamente incapaz, debido a la ausencia de consenso sobre su proyecto, a imponerse a través de un proceso de cambio democrático. Como significativo ejemplo de cuales eran los objetivos de la dictadura militar, el punto 2 del decreto secreto 504/77 (Continuación de la Ofensiva contra la Subversión) establece lo siguiente

'El Ejército accionará selectivamente sobre los establecimientos industriales y empresas del Estado, en coordinación con los organismos estatales relacionados con el ámbito, para promover y neutralizar las situaciones conflictivas de origen laboral, provocadas o que pueden ser explotadas por la subversión, a fin de impedir la agitación y acción insurreccional de masas y contribuir al eficiente funcionamiento del aparato productivo del país'

y el entonces ministro de Trabajo, general Horacio Liendo, afirmaba que

'...respecto de la subversión en el ámbito fabril, sabemos que ella intenta desarrollar una intensa y activa campaña de terrorismo e intimidación a nivel del sector laboral. Es necesario conocer el modo de actuar de la subversión fabril, para combatirla y destruirla. Ello se manifiesta por alguno de los procedimientos siguientes: el adoctrinamiento individual y de grupo para la conquista de las clases obreras, colocándose a la cabeza de falsas reivindicaciones de ese sector. La creación de conflictos artificiales para lograr el enfrentamiento con los dirigentes empresarios y el desprestigio de los auténticos dirigentes obreros. Frente a ello el gobierno y las fuerzas armadas de la nación han comprometido sus medios y su máximo esfuerzo para garantizar la libertad de trabajo, la seguridad familiar e individual de los empresarios y trabajadores y el *aniquilamiento de ese enemigo de todos*. Pero cabe la reflexión de *aquellos que se apartan del normal desarrollo del "Proceso" buscando el beneficio individual o de sector, se convierten en cómplices de esa subversión que debemos destruir, lo mismo que a quienes no se atreven a asumir las responsabilidades que esta situación impone*'.⁸

8. *Nunca Más. Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas*, Buenos Aires, EUDEBA, 1984, p. 375.

Mientras el general Suárez Mason afirmaba el carácter global y permanente de la represión como institución del nuevo orden que se pretendía fundar al afirmar que sería

'...absurdo suponer que hemos ganado una guerra contra la subversión porque hemos disminuido su peligro armado'.⁹

Tal vez la única novedad apreciable sea esa intención manifiesta de los burócratas de la dictadura de someter al tejido social a una rígida estructura jerárquica en la que nadie tiene derecho a rechazar el rol -dominante o dominado- que se le ha atribuido, ya que se arriesga a la expulsión de la comunidad militarmente organizada, mediante el expediente de convertirse en "subversivo", lo que equivale a "alienado" y por lo tanto deslegitimado para sobrevivir; en lo que constituye el mejor ejemplo de la impronta fascista que alimentó la ideología militar entre 1976 y 1983.

Obreros	30,2 %
Estudiantes	21,0 %
Empleados	17,9 %
Profesionales	10,7 %
Docentes	5,7 %
Autónomos y varios	5,9 %
Amas de casa	3,8 %
Reclutas y personal subalterno de las FF. de Seguridad	2,5 %
Periodistas	1,6 %
Actores, artistas, etc	1,3 %
Religiosos	0,3 %

Fuentes: *Nunca Más. Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas*, Buenos Aires, EUDEBA, 1984, p. 480.

Y también, como puede observarse en esta tabla casi el cincuenta por ciento de los desaparecidos o detenidos en campos de torura y concentración eran asalariados, y los obreros representaban el grupo más numeroso.

Por lo tanto, el golpe de estado de 1976 no fue el resultado de una crisis de hegemonía en la cual estuvieran directamente amenazados los intereses generales de las clases propietarias o una crisis general de las instituciones políticas frente a una situación de violencia en la que se imponía inercialmente un poder arbitral externo al funcionamiento democrático. Por el contrario, se trató de una acción ofensiva, de un reajuste en las condiciones del funcionamiento del sistema económico y social para acomodarlo a la nueva situación de las relaciones económicas internacionales, que perseguía como fin la eliminación definitiva de los mecanismos estatales y de la sociedad civil que adquiridos en las tres décadas previas garantizaban que parte del ingreso nacional revirtiera a favor de las clases subal-

9. *Diario del Juicio*, Buenos Aires, I, n° 4, 18/06/1985.

ternas, y que con su vigencia bloqueaban una nueva etapa de acumulación y beneficios a los sectores que mejor conexión tenían con los ámbitos financieros y comerciales internacionales.¹⁰ Y que esa actuación, debido a las graves consecuencias que acarrearía para la mayoría de la población, un control y disciplina social férreas, era sólo garantizable mediante una dictadura que no sólo anulara a los mecanismos políticos participativos y las organizaciones de defensa de los asalariados, sino también instaurara de forma permanente una estructuración jerarquizada e inmovilista de la sociedad basada en la exclusión no sólo política y social, sino física de aquellos que no compartieran el nuevo régimen establecido. El ejército como único grupo de intervención política cohesionado, no sólo por el monopolio de la fuerza, sino por su tradicional identificación con los intereses nucleares de las clases dominantes, era el vehículo por excelencia para alcanzar tal situación.

Como consecuencia de lo anterior, en la actual situación democrática argentina, una vez desactivados los mecanismos que podían impedir el "libre juego de las fuerzas de mercado", la identificación ambigua y poco condenatoria de la fase dictatorial de la actual dirigencia política nacional y los efectos sociales de las políticas aplicadas durante la administración radical y la actual presidencia manifiestan un continuismo en muchos aspectos con la época de la dictadura militar.¹¹

Como las fuerzas armadas se transformaron en el punto de apoyo indiscutible de los distintos sectores empresariales, en el seno de la cúpula militar se produjeron fricciones que condujeron a la alternancia de diferentes subproyectos, siempre bajo el común denominador de la sumisión total del sector asalariado: 1976-80, fase neoliberal con predominio del sector financiero y agrario; 1981, una corta etapa en la que se pretendió reequilibrar las transferencias de ingresos entre los sectores anteriores y la porción más concentrada del capital industrial; y 1982-83, en la que se volvió a la orientación de 1976. Como broche final, si en el siglo pasado una guerra como la del Paraguay y la campaña de Roca, habían servido para cohesionar al

10. Algunos autores situaron entre los grupos directamente beneficiados por la dictadura militar a la burguesía terrateniente, que perseguía el usufructo de la renta agraria sin el riesgo de los recortes sufridos en el pasado por la política estatal de subvención de la acumulación y desarrollo del capital industrial; y por otro el capital transnacional que a partir de 1955 y más aceleradamente, a partir de 1966, se había instalado firmemente en la gran industria y el sistema financiero argentinos, Fernando Porta, «Crisis económica y de dominación política en la Argentina contemporánea», en vv.aa., América Latina en crisis, op. cit., p. 177.

11. En 1993 el total de las exportaciones había caído un 5 por ciento respecto a 1991, pero la proporción mayor correspondió a las de productos industriales tanto en volumen como en valor, el 70 por ciento de lo exportado continuaban siendo los bienes primarios y manufacturas de origen agropecuario con escaso valor añadido; mientras las importaciones crecían un 400 por ciento entre 1990 y 1992, especialmente en el rubro de los bienes de consumo, lo que demuestra la persistencia del modelo económico especializado en la agroexportación, Jorge Fonseca, «Argentina: ¿ante un «milagro» o un espejismo?», *Cuatro Semanas y Le Monde Diplomatique*, Año 1, nº 4, mayo de 1993. Pero no sólo el análisis de situación revela la continuidad de objetivos. También existen declaraciones de militares que la corroboran. El general retirado Domingo Bussi, conspicuo representante de la dictadura militar y célebre por la crueldad con que gobernó la provincia de Tucumán a partir de 1976, declaró, poco antes de ser electo gobernador de la misma en julio de 1995, que compartía sin ambages los objetivos estratégicos, económicos y sociales, del gobierno de Carlos Menem, *La Vanguardia*, Barcelona, 3/07/1995.

ejército junto a las clases dominantes, una nueva guerra iba a permitir a la dictadura suprimir las fricciones y los choques de intereses entre los diversos integrantes del bloque de poder que la sostenía y contarrrestar las protestas populares que los sindicatos comenzaban peligrosamente a canalizar. El objetivo -con aires mussolinianos- era la reconquista de las islas Malvinas, la última aventura de un proyecto criminal: el ciclo secular se cerraba. La recurrencia en las metas y los métodos parece ser el carácter distintivo de la política argentina en los últimos cien años.

Es que en términos generales, y sin pecar de ligereza, la historia argentina puede sintetizarse, desde la consolidación definitiva de la nación estado surgida de la independencia en 1880, en dos etapas. La primera es el medio siglo que finaliza en 1930 donde el país adquiere progresivamente una estructura compleja, diversificada y aparentemente abierta a partir de la consolidación de un capitalismo basado en la agroexportación, del cual es el principal beneficiario un sector muy definido de las clases propietarias: el reducido grupo de hacendados y grandes comerciantes exportadores de Buenos Aires y el litoral pampeano, que aprovecharon las posibilidades que les ofrecía el mercado internacional para colocar en condiciones ventajosas la producción agropecuaria. En éste existe una continuidad del sistema político inaugurado con la constitución de 1853, y que aparenta seguir la evolución democratizadora similar a la que se estaba produciendo en algunos países europeos. La segunda, que persiste hasta la actualidad, iniciada con esa divisoria de aguas que significó la crisis internacional de los años treinta -y en la cual Argentina resultó afectada del mismo modo que otros países especializados en la producción primaria-, está presidida por las tensiones y conflictos generados por la continuidad del predominio de esa gran burguesía agroexportadora, que habiendo perdido posiciones en la arena internacional continuó siendo la principal fuente de divisas para financiar la continuidad del sistema económico. La intervención cíclica y recurrente del golpe de estado militar se convierte en el rasgo político más conspicuo de la etapa, donde el ejército actúa recursivamente para corregir o impedir la adopción de decisiones políticas que favorezcan a otros sectores sociales distintos de la elite dominante, haciendo de la democracia el verdadero "estado de excepción" de la vida política argentina.¹²

Sin embargo, en este artículo pretendemos exponer, sin más pretensión que el ejercicio del ensayo y la reivindicación de la memoria, que los rasgos principales de esa ideología totalitaria y contrarrevolucionaria, que incluye como elemento fundamental el recurso a la intervención del poder militar y el liderazgo de las estructuras

12. Alain Rouquié observa que los golpes militares de 1955, 1962 y 1966 se produjeron en condiciones en que la coyuntura favorecía los ingresos salariales, y tuvieron como efecto la redistribución del ingreso a favor de los empresarios. Sólo se invierte la relación entre coyuntura salarial e intervención militar en el golpe de estado de 1943, tanto en la relación a la situación de partida como a las consecuencias, Poder militar y sociedad política en la Argentina, Buenos Aires, Emecé, 1981, II, pp. 401-404. Y respecto a la persistencia del modelo predominantemente agroexportador es cifra elocuente que todavía en 1972, las exportaciones denominadas tradicionales -productos agropecuarios sin mayor valor agregado- alcanzaran en 1972 el 80,7 por ciento del total exportado, y en 1976 el 74,3 por ciento (correspondiente a la carne y los cereales casi el 50 por ciento de la cuota), Fernando Porta, «Crisis económica y de dominación política en la Argentina contemporánea», en VV.AA., *América Latina en crisis*, op. cit., p. 110.

castrenses en la defensa de los intereses de la elite social, confiriendo a la confrontación política el carácter de un ejercicio que implica la posibilidad de la eliminación física del disidente o adversario, pueden detectarse en la etapa previa, en la que el funcionamiento constitucional no tuvo aparente solución de continuidad, donde el terreno fértil en el que abonaron esas ideas fue el propio del desarrollo conflictivo de la sociedad agroexportadora, cuya expresión política más genuina fue una suerte de *democracia oligárquica* o *aristocratizante*, caracterizada simultáneamente por una apertura sin limitaciones a los flujos internacionales de capital y población y el férreo control, que sobre los mecanismos de decisión política mantenía una fracción restringida y concentrada de las clases dominantes: la gran burguesía terrateniente, principal protagonista y beneficiaria del gran crecimiento económico experimentado por Argentina en ese período a caballo entre dos siglos, que impedía una plena integración y participación de los frutos de su crecimiento a las clases sociales subalternas. De ese modo en la etapa anterior a 1930 se conformó una ideología autoritaria que militarizó la acción política al elevar al ejército a la consideración de organización por excelencia, para la intervención política interna, así como modelo de organización social que asegurara la disciplina y en el inmovilismo jerárquico para salvaguardar, más allá de cualquier contingencia, un forma específica de inserción en el mercado mundial que coincidía con el proceso fundacional de la nación-estado.

1878-1902 'Y en el comienzo... fue el estado. De "La Conquista del Desierto" al conflicto con Chile, o la lucha contra el enemigo externo

Esa burguesía, a la que a falta de mejor término fue denominada como oligarquía y que tuvo su mayor activo en la propiedad agraria, procedía, en parte, de otros espacios de la actividad económica, entre ellos los financieros y comerciales, de tal modo que muchos de los grandes propietarios rurales registraban el origen de sus fortunas en la actividad comercial portuaria desarrollada en Buenos Aires desde el comienzo de la etapa independiente o aún antes, bajo la colonia (como es el caso de uno de los más conspicuos miembros del patriciado porteño, la familia Unzué, cuya actividad comercial puede situarse en el siglo XVIII, y su actividad como hacendados ya es plena en la primera mitad del XIX); y que otros habían recorrido el camino inverso, en la medida en que se valorizaba la tenencia de tierras sus inversiones se habían dirigido a la ciudad. Pero lo importante es que el paso de una a otra actividad no era de ningún modo sustitutiva sino complementaria, produciéndose de este modo una diversificación de intereses y negocios tan amplia como lo permitiera el nivel de desarrollo económico y el principio de las ventajas comparativas que imponía a la Argentina su inserción en el mercado internacional como país productor y exportador de productos agrarios.¹³ De ahí deriva uno de los rasgos más

13. Casi todos los autores coinciden al afirmar que esos propietarios rurales que mostraban una gran capacidad de disminuir los riesgos diversificando actividades, tanto por el origen distinto de sus fortunas como por las actividades que emprendían, irían adquiriendo progresivamente conciencia de constituir una élite económica cuyo rasgo distintivo era la concentración de la pro-

característicos de este sector social. Actúan como grupo muy dinámico, capaz de diversificar rápidamente sus fuentes de beneficios, que mantienen simultáneamente en la ciudad y el campo, favorecidos tanto por la fertilidad natural de las tierras explotadas que les permite practicar una ganadería o agricultura extensivas, sin necesidad de grandes inversiones de capital -escaso en la primera etapa de acumulación- como por la conexión estrecha con los circuitos comerciales internacionales que les permitía cambiar rápidamente de rubro exportador o importador ante las señales mínimas que lanzaba el mercado.¹⁴ Sin embargo, no toda su capacidad de acumulación se debió a la perspicacia y dinamismo comercial ni a su sentido de la oportunidad, apoyado en el principio de las ventajas comparativas. A pesar de su declarada fe en el liberalismo económico, que por principio le hacía refractaria a cualquier intervencionismo estatal, esta burguesía agraria fue extremadamente consciente de la importancia del control de los resortes principales del joven estado, consiguiendo hacer coincidir la orientación general de los sucesivos gobiernos, con el territorio de sus operaciones en el campo de la gran producción agropecuaria y la exportación, que de hecho se transformó en sinónimo del crecimiento general de la actividad económica. Pronto fueron conscientes del equilibrio a que les obligaba el sistema de ventajas comparativas. Al depender sus beneficios de los precios externos que no podían controlar, el mantenimiento de un gradiente permanente con los internos fue una preocupación fundamental que sólo podía obtenerse con una reglamentación estatal que evitara la valoración excesiva del papel moneda con el que pagaban sus gastos y deudas en el ámbito interno, frente al oro que recibían por sus ventas en el exterior. Este objetivo se vio cumplido con cre-

piedad agraria, pero que trascendía el ámbito rural para convertir sus intereses en la representación de los intereses nacionales, ver, por ejemplo Hilda Sabato, *Capitalismo y ganadería en Buenos Aires. La fiebre del lanar* (1850-1890), Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1989, pp. 168-175.

14. Alain Rouquié, al intentar definir a la élite dominante dentro de las clases propietarias argentinas se pregunta sobre el término más pertinente para designar a este grupo social al que la jerga política habitual, e incluso el discurso académico -historiográfico y sociológico- ha denominado como oligarquía, ante la imposibilidad aparente de circunscribir su inmenso poder a una base sectorial económica definida y específica agraria, comercial o industrial, opta por considerarla como grupo muy dinámico, capaz de diversificar rápidamente sus fuentes de beneficios, mientras mantengan la característica de ser poco arriesgados en cuanto a inversión básica y aseguren beneficios a corto plazo, y por lo tanto si están ligados a la propiedad terrateniente es más por su potencialidad especulativa en función de la capacidad de la renta potencial como valor refugio, que a su opción en la especialización en la producción agrícola, *Argentina, hoy*, op. cit., pp. 39-40. A su vez, David Rock la define como un grupo surgido del ámbito de la actividad mercantil colonial, más que de la tenencia de la tierra, que habría invertido en la adquisición de tierras los beneficios obtenidos de aquella actividad después de la independencia y que habría logrado su preeminencia política y social al saber aprovechar las favorables condiciones creadas por la demanda de alimentos en el mercado internacional -y especialmente europeo- a partir de 1870. Pero, y aquí sí podemos establecer una diferencia con otros grupos terratenientes, tal vez por su estrecho ligamen con el comercio exportador, pronto diversificó notablemente sus actividades inversoras participando en actividades financieras y de transformación ligadas a la actividad agropecuaria, haciendo que esta gran burguesía fuera al mismo tiempo un grupo de intereses rurales y urbanos, *El radicalismo argentino, 1890-1930*, Buenos Aires, Amorrortu Editores, 1977, pp. 14-17. Una opinión similar mantiene Hilda Sabato, al describir el surgimiento de los hacendados dedicados a la ganadería ovina, *Capitalismo y ganaderías en Buenos Aires*, op. cit., pp. 168-175.

ces entre 1880 y 1916, cuando el gobierno de la nación y la mayoría parlamentaria fue sistemáticamente ocupada con dirigentes políticos estrechamente ligados a esa elite por vínculos no sólo económicos, sino sociales y familiares. La acción estatal que permitía una distribución de la renta nacional favorable al sector agropecuario, se basó principalmente en varios instrumentos, entre ellos la política monetaria - dentro de la cual fue la de mayor trascendencia el control de cambios, la política fiscal -que basaba la recaudación fundamentalmente en los impuestos sobre el consumo en lugar del patrimonio, el estímulo a la inmigración exterior, y las garantías a la inversión exterior para el desarrollo de las infraestructuras básicas de transporte y comercio exterior.¹⁵ Ello permitía controlar los mecanismos que garantizaban la preeminencia de sus beneficios frente a la fluctuación casi constante de una economía tan dependiente de las señales que enviaba el mercado externo. El papel del control de cambios y la capacidad de distribuir regresivamente el endeudamiento externo e interno fueron piezas claves en el fortalecimiento de su hegemonía, impensables sin la participación decisiva del estado.¹⁶ Del mismo modo era imprescindible la intervención estatal en el proceso de importación de mano de obra barata mediante la inmigración, con pasajes subvencionados y la extensa red exterior de agentes promotores, con el efecto añadido de alimentar el crecimiento de un mercado interno, que a su vez era estímulo tanto de las actividades del comercio internacional como del desarrollo de una incipiente manufactura y servicios. Sin embargo esta no dio lugar al surgimiento de una burguesía industrial que disputara la hegemonía política y social a elite agroexportadora, a diferencia del fenómeno observado con frecuencia en otros países. El desarrollo del sector secundario siempre se deslizó sobre dos ejes: uno, concentrado y relativamente tecnificado, relacionado directamente con la transformación de productos agrícolas, del que son un ejemplo destacado los "frigoríficos"¹⁷, poseídos o coparticipados con capitales británicos y norteamericanos; el otro, una red heterogénea por su escala y concentración, de talleres y establecimientos fabriles que producían para el mercado interno aquellos productos cuya importación no era ventajosa, y su producción se basaba en

15. Por supuesto que los grandes propietarios de tierras gozaron de otras ventajas frente a otros grupos económicos que fueron surgiendo con la diversificación secundaria al propio desarrollo de la economía agroexportadora: desde las preferencias crediticias para el sector exportador desde las instituciones financieras estatales y privadas, al incremento de los precios internos provocado por la oferta rígida de productos alimentarios que eran al mismo tiempo base de la dieta de la mayoría de la población y al mismo tiempo principales objetos de la exportación. Sobre el papel de los sistemas de crédito y el papel del Banco de la Nación, ver Hugo F. Castillo y Joseph Tulchin, «Desarrollo capitalista y estructura social en la Argentina, 1880-1940», *Revista Paraguaya de Sociología*, Año 22 Nº 63 (mayo-agosto), pp. 123-163 y Laura Randall, *Historia económica de la República Argentina en el siglo XX*, Buenos Aires, Amorrortu Editores, 1983.

16. La Ley de Convertibilidad de 1897, por medio de la cual Argentina se integró al sistema del patrón oro, fue una respuesta gubernamental para frenar la apreciación del peso, consecuencia de la balanza comercial favorable a lo largo de esa década, a favor de los intereses agroexportadores, quienes además eran los principales deudores de los créditos concedidos por las instituciones financieras locales, como muy bien ha demostrado J. Panettieri en «La ley de conversión monetario de 1899 en el curso de la formación de la Argentina moderna», *Desarrollo Económico*, v. 21, nº 82 (julio-septiembre 1981), pp. 231-256.

17. Empresas dedicadas a la industria cárnica.

métodos semiartesanales y en el trabajo manual intensivo. Los momentos de expansión industrial fueron inducidos por circunstancias externas. El primero por la reducción de importaciones promovida por el gobierno después de la crisis de 1890 con el fin de compensar la balanza de pagos, mediante la depreciación monetaria al continuar la emisión de circulante hasta 1893, a lo que contribuyó la contracción de la afluencia de capitales extranjeros.¹⁸ El segundo como consecuencia de la protección "sobreenvenida" por el estallido de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo ninguno de los dos períodos sentaron las bases de un desarrollo industrial sostenido. La superación de la recesión de 1890, entre 1903 y 1904, por un nuevo ciclo expansivo internacional, para el primer caso, y el final de la guerra, para el segundo; marcaron el reinicio del ciclo agroexportador relegando nuevamente a la actividad industrial al rol subordinado.

Pero la intervención estatal no se circunscribió al ámbito económico y financiero para el despliegue de la estrategia agroexportadora. La ampliación hacia el sur del territorio nacional de las tierras pasibles de explotación ganadera se había convertido en un objetivo prioritario de los sucesivos gobiernos desde la primera presidencia constitucional de Bernardino Rivadavia, y antes de la definitiva consolidación de la organización nacional, durante el gobierno confederal de Juan Manuel de Rosas. Sin embargo la propia debilidad del estado argentino, sumido en las convulsiones de los enfrentamientos interprovinciales anteriores a 1853, y que continuaron hasta la presidencia de Nicolás Avellaneda, a lo que se había agregado el ingente esfuerzo de su participación en la guerra contra el Paraguay, no habían podido avanzar sobre ese territorio ocupado por pueblos nómadas más allá de una línea que dejaba fuera de control parte de las provincias de Buenos Aires, la totalidad de la actual provincia de La Pampa, y las mitades sur de las provincias de San Luis y Mendoza, cubierta con el nombre significativo de "la frontera" por una sucesión de fortines que se extendía desde la costa atlántica hasta la cordillera de los Andes, a guisa de *limes* criollo. El ejército, liberado de las obligaciones de la guerra de la Triple Alianza, y de la "pacificación" interior de las insurrecciones provinciales que desafiaban el poder del gobierno central, estaba en las mejores condiciones para atacar la empresa.¹⁹

Es en esta época donde ya aparece por primera vez claramente formulada la tesis del "enemigo interior" para justificar la intervención directa de las fuerzas armadas en el desarrollo político y económico del país, anticipándose en muchos años a la Doctrina de la Seguridad Nacional promovida por los EE.UU. en América Latina durante la Guerra Fría para utilizar los ejércitos nacionales en tareas de represión doméstica de las contestaciones populares que amenazaban real o

18. La crisis de 1890 fue, a nivel local, una consecuencia de la absoluta dependencia de la economía argentina de los mercados exteriores, y fue provocada por la caída de los precios de exportación de los principales productos agropecuarios, a lo que se sumó el peso de la deuda exterior acumulada. Lo curioso es la respuesta que propuso Juárez Celman para afrontar el déficit de recursos para hacer frente a las obligaciones exteriores, por su extraordinaria «modernidad», al proponer la venta de las empresas públicas productivas, ya que consideraba nefasta por esencia la capacidad de gestión estatal, ver José Panettieri, *La crisis de 1890*, Buenos Aires, CEAL, 1984, p. 13.

19. León Pomer, *La guerra del Paraguay ¡Gran negocio!*, Buenos Aires, Caldén, 1968.

imaginariamente los intereses de las clases dominantes. Aunque es indudable que esta les dotó de una jerga ideológica "modernizada" y de un "enemigo" complejo e intelectualmente sofisticado (como afirma el ex-ministro menemista), es en la "Conquista del Desierto" donde se origina la tradición que transforma al oponente político y social en un cuerpo extraño a extirpar de una sociedad originariamente armónica, en un enemigo "convencional" con el que legitimar su exterminio, para favorecer el progreso nacional o defender la integridad del orden social.²⁰

El primer escenario de su prolongado intervencionismo es un inmenso mar de hierba en el que puede divisarse sin dificultad la línea del horizonte, en una de las praderas más fértiles del mundo. Ocupado desde siglos por pueblos cazadores y recolectores, su tronco principal eran los mapuches -también llamados araucanos- que habían mantenido con éxito a raya los intentos españoles de penetración en su territorio, y a los que se consideraba no aptos para ser asimilados ni siquiera como peones o jornaleros de las haciendas ganaderas, máxime bajo la perspectiva de la fácil obtención de fuerza de trabajo que auguraba la abundante inmigración europea que iniciaba en esa época su segundo ciclo cambiando los EE.UU. por América del Sur y Australia.²¹ Fue un remedo del avance que EE.UU. realizó hacia el oeste norteamericano, pero con dos diferencias substanciales: el tiempo necesario fue mucho menor -la campaña transcurrió entre octubre de 1878 y junio de 1879-, lo cual nos da una idea de la "dificultad" militar que ofrecía el enemigo a abatir-, y las tierras conquistadas no fueron ocupadas por pequeños y medianos propietarios -el típico *farmer* estadounidense- sino que engrosaron las propiedades de antiguos terratenientes o permitieron la transformación en hacendados de ricos comerciantes de Buenos Aires. La expedición comandada por el general Roca se financió con la venta anticipada de las tierras a ocupar, pasando así 8,5 millones de hectáreas a manos de 381 personas.²² Si bien la operación se tituló pomposamente "Expedición al Desierto" y fue planificada como una campaña militar, el propio Roca reconoce que no se trató de tal cosa, y aunque no lo explicita, tácitamente asume que se trató de una masacre y no de un enfrentamiento entre combatientes más o menos pertrechados.²³ El papel del ejército fue muy activo en esta "solución final" del problema indio, ya que

20. La inmutabilidad del latifundio puede comprobarse al observar que entre 1876 y 1903 1800 propietarios se repartían 40 millones de hectáreas, y todavía en 1969 el 51,7 por ciento de la superficie de las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba, La Pampa y Santa Fe -el área de explotación pampeana- era posesión de sólo 13.362 personas físicas o jurídicas, ver Alain Rouquié, *Argentina hoy*, op. cit., pp. 32-33 y François Chevalier, *América Latina, de la independencia a nuestros días*, Barcelona, Editorial Labor, 1979, p. 224.

21. En 1887, Mariano Pelliza se encargaba de «justificar» en *El país de las pampas* el enfoque exterminista con que se había abordado la cuestión indígena: 'Como una muestra del estado moral del indio y del abatimiento de su razón, él no entra a su vivienda de pie como el hombre que tiene conciencia de la superioridad de su estirpe, sino arrastrándose como la fiera para tenderse entre las basuras que le servían de lecho; sin tener idea del pasado, sin proyectos ni esperanza para el porvenir', citado por Hugo E. Biagini, «El racismo, ideología neocolonial y oligarquía», en R. Bergalli y E.E. Mari (coords.), *Historia Ideológica del Control Social (España-Argentina, siglos XIX y XX)*, Barcelona, PPU, 1989, p.539.

22. D. Rock, *Argentina 1516-1987. Desde la colonización hasta Raúl Alfonsín*, Madrid, Alianza Editorial, 1988, p. 208.

23. Escribe Julio A. Roca, al terminar la campaña contra los indígenas '...Desde ayer estoy en este punto al habla y con frecuentes comunicaciones con las fuerzas de Uriburu que dominaban todo el

Roca presionó, como ministro de Guerra, sobre el presidente, Nicolás Avellaneda, para que variara los proyectos iniciales que había elaborado su antecesor, Valentín Alsina, en los que sólo se pretendía desplazar más al sur la línea de fortificaciones - "la frontera"- sin llegar a la completa eliminación de los pueblos indígenas; lo que reforzó aún más el sentimiento de que eran las fuerzas armadas las que acababan de darle a la nación su configuración definitiva.²⁴ Pero además el gobierno recompensó a los militares participantes distribuyendo parte de las tierras comprendidas entre el occidente de la provincia de Buenos Aires, la zona oriental de la provincia de La Pampa y el sur de San Luis, en la misma área donde se otorgaban predios a las compañías ferroviarias como subsidio de sus actividades, lo que revela como la crónica necesidad de fondos de financiación estatales subyacían también en este tipo de decisiones. Y es dable suponer que este aspecto ligó aun más a la corporación militar con el proyecto agropecuario, aun cuando parte de esas posesiones hubiesen terminado en manos de especuladores que fueron los grandes beneficiarios de la operación favoreciendo la concentración de la propiedad en las tierras apropiadas.

Pero más allá de las consecuencias económicas de la "Conquista del Desierto", nos interesa destacar aquí las consecuencias ideológicas y políticas de la misma. Y en ese sentido, podemos considerar la presunción de la imposibilidad de asimilación de los pueblos indígenas, que justificaron a ojos del ejército y el gobierno su exterminio, como un primer antecedente de las coordenadas de la ideología militarista que más tarde impregnaría la represión del movimiento obrero y la justificación de los golpes de estado: la identidad entre organización social y colectividad nacional, y por lo tanto un paso más dado en la dirección de la definición del perfil del *enemigo interno*.²⁵ La experien-

Neuquén. ¡La nueva línea de frontera queda pues definitivamente establecida sin que nos haya costado más sacrificio que comer carne de yegua! Si no hubiera sido el pequeño contratiempo de los proveedores, esta campaña hubiera tenido los aires de un paseo como yo lo he pensado siempre [...] Muchos indios de Baigorrita, de Pincén y demás tribus mezcladas a pie y en la mayor miseria han caído en poder de las fuerzas de Uriburu. Andan como locos estos desgraciados. Por todas partes se encuentran con fuerzas. Ya no hacen ademán, no digo de pelear ni disparar siquiera, hasta que vean un soldado y se rinden, cualquier número que sean. El cerco está perfecto y no se escapará un solo de los que hayan quedado adentro', citado por Félix Luna, *Soy Roca*, Madrid, Ediciones Apóstrofe, 1991, p. 466.

24. José Félix Luna, *Soy Roca*, op. cit., p. 120 y 138. El autor pone en boca del general Roca la descripción de sus contactos con representantes de los núcleos decisivos de la economía y sociedad bonaerense: '...yo comprendía que nada importante se puede hacer en este país si se carece de base en la sociedad porteña, que forja las corrientes de la opinión y enaltece o desabarata prestigios; que puede brindar los apoyos más sustanciales o crear los obstáculos más insalvables. Hablé con personas de apellidos patricios y otras menos copetudas pero también significantes. Y también con algunos cuyos nombres no aparecían en los diarios pero manejaban palancas importantes: los que hacían negocios con los ferrocarriles, tenían empresas de colonización, se asociaban a los bancos del exterior que colocaban los empréstitos del gobierno y eran consejeros de los capitalistas ingleses y franceses: la gente, en suma, que apostaba a la prosperidad del país y deseaba un régimen político ordenado y continuo como condición de enriquecerse. Las quince mil leguas que prometía el libro de Zeballos estaban presentes en las conversaciones con esa fauna, en la que yo rolabo con desconfianza y sin afinidad, pero a la que debía atraer a mi redil'.

25. La Sociedad Rural Argentina, fundada en 1866 por un grupo de hacendados de la provincia de Buenos Aires, especialmente criadores de ovejas, y desde entonces reducto corporativo de la gran burguesía agraria, se declaraba defensora «de los intereses generales del país, y no de particulares intereses de círculos», citado por Ricardo Sidicaro, «Poder y crisis de la gran burguesía agraria argentina», en A. Rouquié (comp.), *Argentina, hoy*, México, Editorial Siglo XXI, 1982, p. 58.

cia en la guerra indígena y la conquista territorial posibilitan la definición de un nuevo tipo de enemigo, no convencional, que no servía o pertenecía formalmente a otro estado, y que podía confundirse con los auténticos miembros de la comunidad al encontrarse habitualmente dentro de los confines de la nación, aunque Roca reforzará su solución belicista argumentando que existía una connivencia entre los caciques y el sempiterno enemigo chileno. Por lo tanto la identificación y aniquilación del enemigo - el objetivo y razón de ser de la institución militar- debía basarse en otros rasgos distintos a su bandera o uniforme, de los cuales era el más evidente su inadaptación al orden social vigente (¿qué prueba mejor de que no se trataba de compatriotas?), que a su vez era la condición de existencia del estado y la nación argentinas, porque eran sus dirigentes, entre los cuales se contaban individuos como el general Roca y sus compañeros de elite, quienes habían ganado definitivamente para la república el rango de nación civilizada, al conectar sólidamente, gracias a las tierras conquistadas para su explotación, con las naciones más avanzadas del mundo.²⁶

La Campaña del Desierto es también un hito importante en la influencia que adquirió la burocracia militar sobre los diversos líderes locales, ya que si bien el ejército había intervenido en otros frentes en la década de 1870 como fue la eliminación de las últimas partidas de caudillos campesinos, estas acciones, al afectar las sensibilidades autonómicas de las provincias eran todavía vistas como la inveterada pretensión de Buenos Aires a un centralismo hegemónico. De aquella surgió el liderazgo indiscutido del general Julio A. Roca, capaz de aglutinar bajo su dirección a los dirigentes provinciales como a la gran burguesía porteña, principal impulsora del proyecto agroexportador, actuando como "hombre fuerte", "caudillo entre caudillos" -casi un cesarismo en el sentido más clásico del término- ya que aportaba el liderazgo de un ejército victorioso empeñado en una ampliación del territorio nacional, presentada como una operación bélica convencional contra pueblos extraños a la comunidad nacional e imprescindible para el definitivo impulso de un crecimiento económico que favorecería al conjunto de la nación. Ello le valió dos presidencias de la república (1880-1886) y (1898-1904), y una clara consolidación del complejo "militar-terrateniente".²⁷ Es el resultado del pretorianismo de un ejército que ha dejado de ser un conjunto de fuerzas al servicio de caudillos político-militares de la guerra de la independencia enfrentados entre sí hasta 1853, para transformarse en la institución más organizada del nuevo estado que actuaba como factor cohesivo y de soporte de unos intereses dominantes en la medida en que su intervención fue decisiva para la ampliación del área de explotación de esos ganaderos y comerciantes.²⁸

26. José Félix Luna, *Soy Roca*, op. cit., pp. 100-101.

27. R. Cortés Conde y E. Gallo, *La formación de la Argentina moderna*, Buenos Aires, Paidós, 1967, pp. 50-51.

28. R. Cortés Conde y E. Gallo, *La formación de la Argentina moderna*, op. cit., pp. 22-23. El sometimiento de las poblaciones indígenas del norte limítrofe con Paraguay y Brasil comenzó más tarde y requirió más tiempo, de 1898 a 1917, lo que revela la importancia del factor económico y los intereses de la élite en asegurar el control del territorio en la «Conquista del Desierto», más allá de las necesidades del estado en afirmar sus fronteras; Ester Kaufman, «Crónica del poder y control militar en la historia argentina», en R. Bergalli y E.E. Mari (coords.), *Historia ideológica del control social (España-Argentina, siglos XIX y XX)*, Barcelona, PPU, 1989, pp. 622-623.

La estabilización oligárquica, 1902-1916

Durante su segunda presidencia es cuando se estrena la intervención directa y sistemática de la policía y el ejército de línea en la represión sistemática de las protestas obreras, que pasan a ocupar uno de los primeros planos de la atención pública al convertirse las huelgas esporádicas en una sucesión continua de conflictos laborales en el último lustro del siglo. La combinación de la ampliación del mercado de trabajo y de consumo nacionales en base a la promoción de los flujos migratorios con esa regresividad en la distribución del ingreso nacional que implicó la apuesta agroexportadora dio lugar a la aparición de las primeras huelgas y organizaciones obreras -sociedades de resistencia- así como de núcleos organizados alrededor del anarquismo y el socialismo. La conflictividad social se agudizó a partir de la profunda crisis de 1890, ya que el gobierno argentino emprendió una política de reducción drástica de las importaciones para conseguir el equilibrio de la balanza de pagos -en una situación de retracción de los inversores internacionales y en que debía hacer frente a las obligaciones de la pesada deuda exterior- mediante un vuelco positivo de los intercambios comerciales con el exterior. Esta primera oleada huelguista, que adquirió una magnitud desconocida hasta el momento, fue consecuencia de las medidas adoptadas para afrontar la recesión y que se tradujeron en el aumento de los precios de los bienes de consumo común - muchos de ellos procedían de las importaciones reducidas o, como era el caso de la carne, eran objeto de la exportación incentivada - así como de la intensificación de la explotación de los trabajadores, y culminó con la primera huelga general realizada en Buenos Aires en noviembre de 1902, y provocó en las clases propietarias el temor y la sensación de un grave desafío al orden vigente con el cambio de siglo. La condición extranjera de la mayor parte de los asalariados comprometidos en esos conflictos, favoreció que los grupos sociales dominantes visualizaran los enfrentamientos sociales como el resultado de una agresión externa trasladada en las alforjas de la inmigración, el trasplante de un problema de estricta vigencia europea pero artificial para la sociedad argentina, o por lo menos, como un problema de incapacidad de adaptación de los extranjeros a la idiosincrasia de su nueva patria, máxime, teniendo en cuenta que la procedencia del grueso de los inmigrantes -italiana y española- no era del agrado de esa elite que siempre había apostado a recibir colonos y trabajadores del norte de Europa. Adquirió arraigo social la idea expresada por algunos disidentes del desarrollo librecambista sobre el peligro de disolución nacional que entrañaba la abigarrada mezcla lingüística y cultural que había acarreado la inmigración. Los grupos políticos tradicionales e incluso la opositora Unión Cívica Radical interpretaban la crisis no en los términos de una consecuencia de la dependencia inestable de la economía argentina de los inversores y mercados externos, sino que recurrían al expediente, más favorable a sus intereses, de transformar los efectos en causas de esa internacionalización y acusar a la inmigración, ahora desenfrenada, de los males que se estaban padeciendo. Los *metecos* amenazaban la integridad de la ciudad-puerto-estado. Así parecía reflejarlo un editorial de *La Nación*, siempre cuidadosa de su imagen de prensa prudente y ponderada desde el sector afín a Bartolomé Mitre, en mayo de 1890,

cuando afirmaba que "*Los ciudadanos, los argentinos legales, gozando teóricamente de la plenitud de los derechos políticos, están como diluidos en una enorme masa de simples residentes*".²⁹

Prácticamente la totalidad de la conflictividad laboral de las primeras dos décadas del siglo tuvo como escenario Buenos Aires y algunas capitales provinciales y ciudades importantes de la región pampeano litoral, donde estaba asentado el grueso de los inmigrantes. No se produjeron conflictos de importancia en el medio rural hasta 1912, cuando se produjo la gran protesta de arrendatarios en un área que comprendía el norte de la provincia de Buenos Aires y el sur de las de Santa Fe y Entre Ríos, conocido como el *Grito de Alcorta*, debido a la peculiar organización del trabajo en los grandes establecimientos agropecuarios, que utilizaba numerosa mano de obra temporera en los períodos de recolección reclutada en gran parte entre los trabajadores urbanos no cualificados y los recién llegados en los incesantes embarques desde Europa (migración "golondrina"), y muy poco personal estable, registrándose antes de aquella fecha sólo las huelgas de junio y septiembre de los peones de los ingenios azucareros de Tucumán y un congreso de Obreros del Campo en la ciudad de Pergamino (provincia de Buenos Aires) en 1904, promovido principalmente por las sociedades de resistencia de las ciudades colindantes.³⁰ La sanción de la ley de Residencia el 22 de noviembre de 1902, aprobada en pocas horas por ambas cámaras parlamentarias mientras se extendía por la ciudad de Buenos Aires la primera huelga general, que facultaba al Poder Ejecutivo a expulsar a todo extranjero «cuya conducta comprometa la seguridad nacional o perturbe el orden público» era el asentamiento definitivo de la doctrina, que diagnosticaba el carácter "invasor" de la agitación social y por lo tanto afirmaba el derecho del estado como representante de la sociedad a responder militarmente a lo que desde esa noche se consideraba una agresión extranjera en toda la regla, aunque con características distintas a un conflicto militar convencional.³¹ Como afirmaba Joaquín V. González, ministro del Interior:

29. Citado por David Viñas, *Apogeo de la oligarquía*, Buenos Aires, Ediciones Siglo Veinte, 1975, pp. 91-92.

30. Ver Hilda Sábato y Luis Alberto Romero, *Los trabajadores de Buenos Aires. La experiencia del mercado: 1850-1880*, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1992; Ofelia Pianetto, «Mercado de trabajo y acción sindical en la Argentina (1890-1922)», *Desarrollo Económico*, Julio-Septiembre de 1984, 94; y Alejandro Andreassi, «Inmigración y huelga. Argentina, 1900-1920», en Francesc Bonamusa (ed.), *La huelga general*, Madrid, M. Pons, 1991, pp. 117-145.

31. La Ley nº 4.144, de Residencia establecía que:

Art. 1º- El Poder Ejecutivo podrá ordenar la salida del territorio de la nación a todo extranjero que haya sido condenado o sea perseguido por los tribunales extranjeros, por crímenes o delitos de derecho común.

Art. 2º- El Poder Ejecutivo podrá ordenar la salida de todo extranjero cuya conducta comprometa la seguridad nacional o perturbe el orden público.

Art. 3º- El Poder Ejecutivo podrá impedir la entrada al territorio de la República de todo extranjero cuyos antecedentes anteriores autoricen a incluirlo entre aquellos a que se refieren los dos artículos precedentes.

Art. 4º- El extranjero contra quien se haya decretado la expulsión, tendrá tres días para salir del país, pudiendo el Poder Ejecutivo, como medida de seguridad pública, ordenar su detención hasta el momento del embarco.

Art. 5º- de forma. (No fue derogada hasta 1958).

"El mercado europeo está esperando los barcos cargados con nuestros productos, y no llegan porque no pueden salir de nuestros puertos, porque hay elementos anárquicos extranjeros, de ninguna manera vinculados a nuestro país, que están interesados en evitar que esa exportación se verifique, supeditando a intereses puramente gremiales los más grandes intereses de la nación.³²

Su aplicación, que condujo a la deportación creciente de militantes obreros, obligó al partido socialista, entre 1903 y 1905, a denunciar el carácter creciente-mente xenófobo que acompañaba a las manifestaciones antisocialistas y anti-obreras tanto de los miembros parlamentarios del PAN así como de la prensa favorable al gobierno.³³ Así mismo puede comprobarse que es en los años inmediatamente posteriores a su sanción que comienza a utilizarse en la prensa común el término "subversivo" o "subversión" para referirse a los militantes o actividades del movimiento obrero.³⁴

Por lo tanto la asociación entre conflicto social y condición extranjera se convirtió en un tópico con ciertos visos de objetividad que lo hacían más permeable entre los más o menos convencidos miembros de la clase alta y media (para el observador desprevenido o ingenuo; no obviamente para los directamente implicados). Incluso se tradujo en los intentos y presiones de conspicuos representantes de las sectores dirigentes para que se limitara la inmigración, y para que se priorizara la contratación de obreros nativos, mucho "menos" conflictivos, desde su óptica, que los europeos. Mientras la represión posterior a 1902 se intensificará con la última insurrección armada de la UCR, aprovechada por el gobierno de Figueroa Alcorta para encarcelar cientos de activistas en buques apostados en el puerto y deportar a otros tantos, aunque no existiera ninguna conexión entre las federaciones obreras y la intenciona radical.³⁵

La intervención militar en los conflictos laborales complementó la repetida instauración del estado de sitio (1902, 1905, 1909 y 1910), que encontró una inesperada justificación en los desafíos planteados a los gobiernos conservadores por las insurrecciones radicales que, continuando la fallida sublevación del Parque en 1890,

32. Isaac Oved, *El anarquismo y el movimiento obrero argentino*, México, Editorial Siglo XXI, 1978, p. 271.

33. Ver, por ejemplo los siguientes artículos de *La Vanguardia, Órgano Central del Partido Socialista Argentino*: «A los campesinos criollos» (29/10/1904), «La prensa y el movimiento obrero (4/02/1905)», «¿Se quieren esclavos?» (17/06/1905).

34. *La Vanguardia* (PSA, Buenos Aires), «La canalla subversiva» (5/11/1904). Aunque la utilización de la figura del enemigo interno por la prensa progubernamental, en alusión al movimiento obrero, fue denunciada por los socialistas en fecha tan temprana como mayo de 1898, al citar un extracto de *La Prensa* que rezaba lo siguiente: 'Esta vez, nos dirigimos a quienes deben comprendernos, y saben hacer mucho, que no hay necesidad de hallarnos amenazados de guerra para colocarnos en las condiciones de ser siempre victoriosos en toda clase de combates y contra toda clase de adversarios...', donde además el periódico socialista compara las intenciones del gobierno argentino con las de la III^a República francesa que condujeron a la sangrienta represión de la Comuna, en el mismo número en que se recordaba a su XXVII aniversario, *La Vanguardia* (PSA, Buenos Aires), «Mostrando la hilacha», 18/03/1898.

35. *La Vanguardia* (PSA, Buenos Aires), «La política criolla y el motín militar» 11/02/1905, «Los presos obreros» 18/02/1905, «El Partido Socialista Argentino a la clase trabajadora» y «La Unión General de Trabajadores a todos los trabajadores de la República» 25/02/1905.

se repitieron en 1893 y 1905, durante la etapa en la que practicaban la abstención electoral. Y especialmente violenta si se trataba de huelgas en el sector ferroviario o portuario, las arterias vitales de la exportación -como sucedió en agosto de 1907 con la masacre de huelguistas en Ingeniero White, en la provincia de Buenos Aires, por fusileros de la marina. La Federación Obrera Argentina (FOA), en su IVº Congreso, celebrado entre el 30 de julio y el 2 de agosto de 1904, resolvía crear un "fondo del soldado" con el fin de estimular y proteger la desertión de reclutas, mientras la UGT, en su IVº Congreso -22 al 26 de diciembre de 1906-, trataba en una ponencia específica las tácticas para enfrentar la acción del ejército y la policía en los conflictos laborales y aprobaba por unanimidad el recurso a la huelga general cada vez que se procediera al arresto de huelguistas. Todo ello revela la extrema presión que estaba soportando el movimiento obrero en ese momento.³⁶ Al final de la primera década del siglo, las huelgas generales eran enfrentadas con un despliegue que dotaba de terrible eficacia y adecuada puesta en escena las decisiones gubernamentales de controlar protestas y disturbios a golpe de estado de sitio. Durante la huelga general convocada por las federaciones obreras FORA y UGT y el partido socialista, para exigir la destitución de Ramón Falcón, jefe de la policía, considerado responsable de la masacre de Plaza Lorea -donde una manifestación anarquista con motivo del 1º de mayo fue arrollada por la policía dejando varias decenas de muertos y heridos-, el ejército desplegó en la ciudad de Buenos Aires alrededor de 5.000 hombres de los batallones de línea que comprendían incluso dos regimientos de artillería.³⁷

Pero no sólo el control social del ejército se limitó a las acciones punitivas en huelgas y otros conflictos. También se extendió a la esfera formativa al actuar como reproductor de conceptos que interesaban a la estabilidad del orden social vigente. En ese sentido debe interpretarse la reforma del ejército de 1901, a pesar del pretexto oficial de la amenaza de una inmediata guerra con Chile, a raíz de los conflictos de límites que se arrastraban desde 1898.³⁸ Implicó la profesionalización del cuerpo de oficiales y suboficiales -con fuertes características estamentales que

36. Sebastián Marotta, *El movimiento sindical argentino*, Buenos Aires, Ediciones Lacio, 1960, Tomo I, pp. 174 y 282-283.

37. Partido Socialista, *La Huelga General de la Semana de Mayo*, 1909. Informe de la Secretaría General del Partido Socialista a las Organizaciones Afiliadas, Buenos Aires, Librería «La Vanguardia», 1909.

38. Este conflicto, además de servir como pretexto para aumentar los gastos militares en una situación de déficit presupuestario no resuelta, produjo una ola de nacionalismo belicista, que obviamente pretendía desviar la atención pública sobre los graves problemas económicos y sociales que afrontaba el país (sólo en Buenos Aires había 40.000 personas en paro forzoso, *La Vanguardia* (PSA, Buenos Aires), 19 de agosto de 1899). El partido socialista denunciaba los ingentes gastos que se realizaban en las fuerzas armadas destacando el desmesurado número de ascensos de oficiales a rangos superiores, desproporcionado para las dimensiones del ejército, una de las primeras decisiones de la flamante presidencia de Roca, *La Vanguardia* (PSA, Buenos Aires), «El militarismo argentino y las economías del presupuesto», 8 de julio de 1899; así como el chovinismo del que hacían gala organizaciones como la Asociación Patriótica, que nucleaba a sectores empresarios y propietarios (y que es una antecesora de la Liga Patriótica Argentina de la primera posguerra), que patrocinaban suscripciones populares para la compra de armamentos, *La Vanguardia* (PSA, Buenos Aires), 18 y 26 de marzo de 1898.

separaban ambos cuerpos- e instituyó, lo que es más importante, el servicio militar obligatorio. Cabe interpretar la reforma más en clave de orden interno que de crisis externa, primero porque la cronología del suceso no permite suponer la eficacia bélica de la reforma, cuando el desencadenamiento del conflicto parecía inminente a fines de 1901, mientras que ese año se caracterizó por ser uno de los más críticos después del comienzo de una nueva recesión en 1897, especialmente por el notable incremento del desempleo que enrarecía el ambiente de las grandes ciudades con la amenaza de un estallido social. La posibilidad de la redención del servicio militar obligatorio por medio de una fianza reafirma aun más la idea de que era un proyecto destinado a la clase obrera, encuadrando a la primera generación de descendientes de inmigrantes en una institución que los aislara, por lo menos temporalmente, de sus ámbitos culturales y sociales específicos.³⁹

Esta sucesión de conflictos impulsó otra función reguladora estatal: la utilización de las fuerzas policiales y del ejército tanto en la represión directa de los movimientos de protesta, como en el refuerzo de la disciplina en los establecimientos mediante la intimidación de los obreros más activos, la infiltración de las sociedades de resistencia y la sustitución de huelguistas por marinería y soldados.⁴⁰ Estos procedimientos fueron incluso sancionados oficial y públicamente por decretos del ejecutivo -especialmente si se trataba de aquellos sectores como los ferrocarriles, considerados estratégicos para la economía agroexportadora-, incluso en la fase "reformista" del régimen conservador, ya que bajo la presidencia de Roque Sáenz Peña, en 1911 y un año antes de la sanción de su célebre reforma electoral, se emitió un decreto que institucionalizaba el papel represivo de las fuerzas de mar y tierra en las huelgas ferroviarias.⁴¹ Decisión que se mantuvo hasta la última presidencia conservadora, cuando Victorino de la Plaza utilizó tropas para acabar con las huelgas en la industria cárnica ("frigoríficos") en 1915.

Pero no sólo es en el ámbito gubernamental donde se desarrolla esa concepción de las causas de la turbulencia social. También la elite reflejará ese enfoque en el ámbito cultural y especialmente el literario, estableciéndose una concepción que trasciende lo coyuntural para configurar una verdadera matriz cultural, una mentalidad capaz de cubrir con todas sus excrecencias la realidad cotidiana y devolverla más allá de la rigidez que impone la codificación de las relaciones de poder, por más irracional que esa parezca ser. La matriz cultural y social engloba

39. Los socialistas se oponían al proyecto presentado por el coronel Richieri, ministro de Guerra de Roca, porque consideraba que afectaba exclusivamente a los trabajadores, y aunque defendían un modelo basado en la milicia ciudadana -al estilo suizo- preferían como mal menor un proyecto alternativo presentado por los generales Capdevila y Godoy que preveía un reducido ejército profesional con una prestación obligatoria por un período muy reducido, en el cual sin embargo veían el riesgo de un ejército «mercenario», *La Vanguardia* (PSA, Buenos Aires), «Los proyectos militares», 28 de septiembre de 1901. Una descripción detallada de esta reforma militar en A. Rouquié, *Poder Militar y Sociedad Política en la Argentina*, Buenos Aires, Emecé Editores, 1981, Tomo I, pp. 80-100.

40. En esta etapa, aparecían en la prensa obrera, incluso denuncias sobre la intervención de la oficialidad del ejército en la intimidación de opositores durante las elecciones, *La Vanguardia* (PSA, Buenos Aires), 14/05/1896.

41. *Boletín del Departamento Nacional del Trabajo*, «Intervención del Estado en las huelgas que afectan el servicio público», n° 19, diciembre de 1911.

el proyecto político y se transforma en ideología, al constituir una visión holística de todas las relaciones y jerarquías y no sólo de las que se desprenden de los actos del gobierno. Algunos ejemplos, ya que la completa enumeración desborda los límites ya sobrepasados de este artículo, permitirán ilustrar nuestra afirmación. Este texto de Miguel Cané, (1851-1905), autor de la célebre *Juvenilia*, realizado en uno de sus viajes

"¡Los negros! He aquí el mal terrible de la Martinica [...] el blanco no tiene más garantías que la guarnición militar, enviada desde la metrópoli [...] Ese antagonismo entre los hombres de progreso y la raza negra, que no ha hecho, no hace, ni podrá hacer jamás nada en ese sentido, es la principal causa de la decadencia actual de la Martinica [...] no hay negro que no sea comunista, como no hay canónigo que no sea conservador. El día que suceda lo que se teme, habrá una invasión a las propiedades de los blancos, que reprimida o no traerá seguramente la ruina".

explica, que sea el escritor, quien además fue senador y diplomático en Gran Bretaña, Colombia y Venezuela, el autor del anteproyecto de la ley de Residencia ya en 1899 -adelantándose al estallido huelguístico en el que el poder político encontrará la oportunidad de su aplicación.⁴² Es el gran comunicador del miedo a la ruptura de ese mundo exclusivo que debe al liberalismo económico todo y que sufre las consecuencias indeseadas que ese liberalismo produce: la "invasión extranjera" en forma de inmigrantes proletarios y advenedizos que quieren ascender de prisa por los peldaños de una escala social que en Europa se tarda generaciones en recorrer, o que no se llega a culminar. Profundamente elitista, considera que el privilegio social es el resultado de un orden natural que el progreso refuerza, no suprime, del cual el mejor ejemplo es la Gran Bretaña finisecular donde es la propia *gentry* quien ha logrado la pujanza comercial y el avance tecnológico sin necesidad de perder su esencia aristocrática, y donde quiere ver el espejo que refleja la legitimidad de su propia clase.⁴³

Pero el curso xenófobo mostrará también pronto ramificaciones especializadas. El enfoque antisemita entre los intelectuales que viven el apogeo de la Generación del Ochenta lo aportará en 1891, Julián Martel, cronista bursátil del diario *La Nación* -portavoz del mitrismo que intentará el derrocamiento de Juárez Celman-, al publicar su novela *La Bolsa* (reeditada en 1898), considerada como uno de los exponentes fundamentales del naturalismo latinoamericano, en donde proyecta un sentimiento xenófobo, que en lo inmediato es deudor de la crisis de la Baring Brothers, y que refleja la desorientación y angustia de los que adhiriendo a una opción económica a la que deben su prosperidad y respetabilidad deben pagar el coste del cosmopolitismo del cual Buenos Aires con su fauna de aventureros es cumplido ejemplo, augurando el avance implacable de los recién llegados sobre los que se consideraban depositarios naturales y beneficiarios exclusivos de su creci-

42. El proyecto del senador, que se transformaría posteriormente en la ley de Residencia, tuvo una inmediata difusión pública y una rápida respuesta de los medios del movimiento obrero, ver *La Vanguardia* (PSA, Buenos Aires), «El Proyecto Cané», 5/08/1899.

43. David Viñas, *Apogeo de la oligarquía*, Buenos Aires, Editorial Siglo Veinte, 1975, pp. 59-70.

miento.⁴⁴ Cuando Martel escribe su libro la población judía era todavía muy escasa en Argentina, su afluencia será mayor recién después de los pogromos que se produjeron en el Imperio ruso después de 1890. Por lo tanto el antisemitismo de Martel, reflejado en su novela en el papel perverso de un banquero y especulador judío, expresa aquí la xenofobia en estado puro, más que el producto específico del contacto con una comunidad cultural distinta a la sociedad local. El judío es el extranjero por antonomasia, el expatriado universal, el meteco planetario para quienes ven en la inmigración la amenaza a su *statu quo*.

Obviamente, Martel no considera en ningún momento la responsabilidad que les podía caer en el desastre económico, y la inquietud social consiguiente, a los inversores nativos ni británicos. Sólo llega a diferenciar entre un capitalismo benéfico -que identifica con la producción agropecuaria- frente a un capitalismo pérfido de carácter especulativo, sin querer reconocer que en la emisión monetaria inconvertible y el uso discrecional de garantías de fondos y depósitos convergían con la intención de Juárez Celman en financiar la deuda pública y de los terratenientes en mantener el gradiente entre sus gastos locales y sus ganancias exteriores.

También cabe considerar como ingredientes de este antisemitismo la apropiación de argumentos inspirados en sucesos europeos, los que impactaban de manera especial a las clases propietarias y el mundo político argentino. Deslumbrados y orientados por la ideología del progreso imparables que con la internacionalización de su economía creían haber conseguido, pretendían que era necesario asumir cualquier constelación de ideas que procediera del Viejo Mundo, incluso el tradicionalismo preilustrado y reaccionario, como condición de modernidad.⁴⁵ Uno de ellos fue el fracaso del proyecto del canal de Panamá, que produjo turbulencias financieras y acusaciones de corrupción, desacreditando a un proyecto que se consideraba una realización cumbre del credo positivista, y que sirvieron para dar alas al hasta entonces minoritario sector antisemita existente en Francia, según nos recuerda Hanna Arendt, liderado por Edouard Drumont y la *Libre Parole*, quienes manifestaban opiniones similares a la de Martel sobre la responsabilidad de los banqueros judíos en la crisis, excusando a los hombres de negocios franceses comprometidos en el frenesí especulativo con la introducción de un factor pertur-

44. Sandra McGee Deutsch, *Counterrevolution in Argentina, 1900-1932. The Argentine Patriotic League*, University of Nebraska Press, 1986, pp. 45-47. Esta autora afirma que este antisemitismo, expresado de un modo menos abierto era compartido por el ámbito de opinión afín a Bartolomé Mitre, quien encabezaba la «oposición» oficial al P.A.N., al tiempo que se difundían en Buenos Aires artículos de Edouard Drumont -antidreyfusard- y otros antisemitas franceses. También comenta que durante 1976-1983, La Bolsa tuvo un relanzamiento público de gran importancia; para el antisemitismo en las prácticas represivas de la dictadura militar ver Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, *Nunca Más. Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas*, Buenos Aires, pp. 69-75.

45. Por otra parte el positivismo al uso, de raíz comtiana, ya proponía, con pretensiones experimentalistas, una visión racista del progreso que concedía el crédito y la posibilidad del mismo en exclusiva a la raza blanca, ver Hugo E. Biagini, «El racismo, ideología neocolonial y oligarquía», en R. Bergalli y E.E. Mari (coords.), *Historia Ideológica del Control Social (España-Argentina, siglos XIX y XX)*, Barcelona, PPU, 1989, p. 536-537).

bador externo -un *chivo emisario*- a la sociedad francesa: los judíos.⁴⁶ El otro acontecimiento que tuvo un enorme impacto fue el caso Dreyfus, el cual al ser presentado oficialmente a la opinión pública internacional como una traición al ejército, tenía una extraordinaria *funcionalidad* para aquellos que pretendían justificar su xenofobia en la amenaza extranjera "desde dentro" a las que consideraban instituciones fundamentales argentinas, como el ejército. No es casual que la segunda edición de *La Bolsa* se efectuó en 1898, en plena crisis diplomática con Chile -con rumores de guerra inminente que sirven para justificar la compra de armamentos- y cuando Buenos Aires comienza a agitarse ante las manifestaciones de dreyfusards y anti-dreyfusards criollos, que comprenden entre los primeros no sólo a los miembros del joven partido socialista y de las organizaciones anarquistas, sino también a una parte de la juventud universitaria, en cuyas filas comenzaban a figurar algunos descendientes de inmigrantes pertenecientes a las clases medias urbanas.⁴⁷

Por lo tanto, será muy fácil ligar ese antisemitismo al antisocialismo y especialmente al antianarquismo, con sus referencias a la fraternidad universal y sus reclamos al internacionalismo, así como su compromiso con causas que eran, sin duda para estos intelectuales de extrema derecha, delitos de alta traición. En definitiva, será muy fácil darle un contenido xenófobo al odio de clase, en un país donde la mano de obra es predominantemente extranjera. Pero hacia el final del siglo el antisemitismo debe haber trascendido el ámbito literario de Martel, ejerciendo probablemente una presión sobre los inmigrados de religión judía, suficiente como para que se produjeran manifestaciones sobre la mejor manera de defenderse de las agresiones xenófobas, como revela este artículo publicado en la prensa socialista donde se aboga por una perspectiva clasista para los trabajadores judíos, frente a los que se reprochan el carecer de una nacionalidad definida para defenderse de los agravios,

"«La causa de nuestros males, dicen los israelitas, es la falta de una nacionalidad; si la tuviéramos seríamos respetados como los demás pueblos» Idea falsa como muchas otras, que predominan entre los explotados y especialmente entre los israelitas que pretenden hacer subsistir esa división de razas, que tiende a desaparecer por una ley natural [...] Ya es tiempo

46. Hanna Arendt, *Los orígenes del totalitarismo. Antisemitismo*, Madrid, Alianza Editorial, 1987, pp. 143-145. Los artículos de Drumont y otros antisemitas tenían una gran difusión e influencia en los medios intelectuales de Buenos Aires, y por supuesto en Martel, quien se apoya en aquellos en sus escritos, David Viñas, *Apogeo de la oligarquía*, op. cit., p. 88.

47. *La Vanguardia* (PSA, Buenos Aires), «¡Viva Dreyfus!», 16/09/1899, donde los socialistas establecen claramente la relación entre antisemitismo y reacción al declarar que 'La Francia republicana y progresista, la Francia pensadora y civil, la Francia de los enciclopedistas, de la revolución y de los derechos del hombre, la Francia de la Comuna, ha sido vencida por la Francia inquisidora y persecutora, por la Francia de la noche de San Bartolomé, por la Francia de Carlos IX, de Bossuet y de Thiers, por la Francia antisemita y bulangista' (subr. en el original), «Manifestaciones pro-Dreyfus», organizadas por estudiantes universitarios y prohibidas por la policía porque '...ha encontrado que tal manifestación es una ofensa ¿para?... los militares franceses [...] los estudiantes, a pesar de esa prohibición, intentaron realizar el meeting pero fueron disueltos brutalmente por el machete policial'; otras repercusiones ver «El meeting próDreyfus y los socialistas», 23/09/1899, «Arrocochea y Dreyfus» (donde se destaca la gran difusión y atención que concita el caso Dreyfus), 26/08/1899, «La agonía del militarismo» (donde se elogia especialmente el papel de Zola y Jaurés en la defensa de Dreyfus), 10/06/1899.

de que el judío pobre fraternice con el cristiano pobre; ya es tiempo de que se una con todos aquellos que sufren y que combaten por la emancipación de la clase trabajadora".⁴⁸

Una segunda generación literaria será la representada por Leopoldo Lugones y Manuel Gálvez. Estos agregan una nueva dimensión al pensamiento reaccionario, al que más tarde se denominaría como corriente *nacionalismo*: su rechazo de la modernización, que no habían manifestado sus predecesores. Esta actitud tiene que ver con su procedencia social y muestra que los intereses generales de las clases propietarias quedaban a veces distorsionados por las fricciones internas en el bloque de poder. Ambos pertenecían a prominentes familias del interior del país que habían sido perjudicadas de algún modo por las consecuencias del desarrollo agroexportador. El primero, era hijo de un hacendado menor arruinado por la crisis de 1890. Gálvez, en cambio, con una familia que había acrecentado su fortuna había visto el embate que sufrían los intereses de sus parientes de organizaciones políticas como la Liga del Sur, liderada por Lisandro de la Torre, en la que se reunían numerosos pequeños propietarios agrarios procedentes de la inmigración.

Lugones, luego de un corto período en la extrema izquierda del partido socialista durante el cual participó junto a José Ingenieros en la redacción del periódico *La Montaña*, comenzó a frecuentar el círculo político del general Roca asumiendo cargos de responsabilidad política en su gobierno, compartiendo esta actividad con la dedicación literaria, llegando a desempeñar la dirección de inspección primaria en el Ministerio de Educación.⁴⁹ Adquiría así una influencia notable en uno de los principales vehículos de la elite liberal para consolidar su hegemonía cultural. Aunque fue uno de los iniciadores del movimiento modernista en Argentina, tuvo incursiones en el vanguardismo a partir de la segunda década del siglo, que compartía con un estilo clásico cuando pretendía enfocar la realidad nacional. Manuel Gálvez por su parte, a través del grupo de estudiantes de derecho que nucleaba la revista *Ideas*, también surgida bajo la influencia del modernismo, se transformó en el adalid del antipositivismo y el tradicionalismo de raíz hispánica.⁵⁰ Para David Rock, esta reivindicación hispanista surge del impacto de la derrota de España por los EE.UU. en 1898, en la que éste último país adquiere una dimensión de amenaza a los valores y relaciones tradicionales de las naciones latinoamericanas, y espe-

48. A. Guerchenoff, «La patria del pueblo», *La Vanguardia* (PSA, Buenos Aires), 13/05/1899.

49. Enrique Dickmann, «Conciencias vendidas», *La Vanguardia* (PSA, Buenos Aires), 14/11/1903, donde el autor, destacado dirigente socialista acusa a Leopoldo Lugones de traicionar su pasado socialista y entregarse en cuerpo y alma al PAN y a la apología del general Roca a cambio de la inspección de Enseñanza Secundaria.

50. David Rock, «Precursors of conservative nationalism in Argentina», *Hispanic American Historical Review*, 67:2, mayo 1987, 271-300. Las influencias europeas que acarreo la apertura al exterior fueron ridiculizadas por Gálvez de este modo: «...comenzamos por traer multitudes de campesinos italianos [...] luego comenzamos a imitar las costumbres inglesas y francesas. Más tarde llegaron los anarquistas rusos y judíos [...]. Las viejas plazas criollas se transformaron en parques ingleses, la bárbara y pobre lengua española fue suavizada y enriquecida con multitud de palabras italianas, francesas, inglesas y alemanas [...] hemos olvidado nuestras groseras tradiciones locales y las ridículas costumbres pasadas de moda [...]. Hoy cualquier puede leer a Voltaire, Marx, Kropotkin o Bakunin por sólo treinta centavos. Como cualquiera puede ver, ahora somos completamente civilizados'.

cialmente aquellas -como Argentina- que tenían una abrumadora matriz agraria a pesar del desarrollo de sus ciudades e infraestructuras. Significa así el triunfo de un industrialismo avasallador, que es, a su vez, la imposición de un individualismo agresivo al que conduce la democracia donde el ascenso social no conoce reparos, trabas ni tradiciones. La postura antinorteamericana de ese grupo era un ingrediente en el contexto del terror que les provocaba el trastocamiento de las estables y rígidas jerarquías sociales argentinas, en el momento en que se intensificaban las protestas de quienes no estaban invitados a un banquete agroexportador que dejaba demasiados platos sucios y rotos.⁵¹

Sus manifestaciones apuntaban a reivindicar el valor de las relaciones paternalistas mantenidas por los hacendados con los trabajadores agrícolas criollos -gauchos-, tan denostados por los promotores de la europeización argentina económica y social. En una coincidencia total con los que desde el periódico o la tribuna parlamentaria reclamaban poner frenos a la inmigración que sólo aportaba una mayor conflictividad social, y sustituir la fuerza de trabajo extranjera con mano de obra local, consideraban al trabajador nativo mucho más leal a sus patronos, respetuoso del lugar que le había tocado ocupar en la jerarquía social. Y estas características habían sido disueltas por la inmigración masiva, que había traído consigo el burdo materialismo de su impaciencia por enriquecerse, arrasando así tradiciones que sostenían las esencias originarias de la nacionalidad argentina. Ligaban así unas determinadas actitudes sociales -la del mítico gaucho- al derecho de ciudadanía, reforzando el discurso exclusivista que alentaba en cada enfrentamiento gubernamental con las reivindicaciones populares, donde las autoridades consideraban cada huelga o protesta como un desafío a la soberanía nacional.⁵² Las susceptibilidades y temores sobre la viabilidad del proyecto nacional, identificado fuer-

51. David Rock, «Precursors of conservative nationalism in Argentina», *Hispanic American Historical Review*, 67:2, mayo 1987, 271-300, pp. 274-275.

52. La persistencia de este discurso en sus términos originales alcanza lógicamente a nuestra época, como por ejemplo, revela la denuncia que hace en 1971 Agustín Tosco, dirigente de la Federación de Luz y Fuerza, de los términos del comunicado con que la dictadura militar de turno -encabezada por Alejandro Lanusse- amenazaba a los participantes en una huelga de maestros, personal de justicia y de la administración pública: 'El régimen que usurpa el poder ha hecho una cuestión de defensa nacional, la represión contra la justa lucha que vienen librando los maestros, empleados judiciales y empleados públicos. Parece una increíble exageración afirmar lo precedente. Pero rigurosamente es así. Lo señala expresamente el propio gobierno en la parte dispositiva del comunicado de advertencia lanzado la semana pasada para intimidar a esos trabajadores en conflicto. Claro que en los fundamentos para decirles a los maestros, judiciales y empleados públicos que los pueden movilizar y militarizar a todos juntos, se habla un hermoso lenguaje de introducción sobre los grandes objetivos que tiene el Gobierno para el bien del país y de todos sus habitantes [...]. Y como último punto de este comunicado, cuyos considerandos tenían tan expresivas y bellas palabras sobre los supremos intereses nacionales, sobre los derechos, libertades y garantías, y sobre la equitativa distribución de la riqueza, nos encontramos con que se destruye todo lo dicho y como punto final se agrega sugerentemente la recordación de la existencia de la Ley de Defensa Nacional. Así lo expresa el punto 5º que textualmente dice: «Que, a tal efecto, debe recordarse a todos los interesados la vigencia de la Ley 16.970 de Octubre de 1966, autoriza la intervención de las autoridades y medios nacionales en caso de corrupción interior». De más tampoco está recordar que, el mismo día que se emite este comunicado, fue sancionada la Ley 19.081 para «prevenir y combatir la subversión interna, el terrorismo y demás hechos conexos», donde intervienen las fuer-

temente con las fuentes de la riqueza controladas por la burguesía agroexportadora, se extendió también a la importante presencia extranjera en los puntos neurálgicos de la actividad social y económica de la república, trascendiendo los límites de clase, tomando nota de los empresarios, comerciantes y profesionales de nacionalidad extranjera que se resistían a integrarse totalmente adoptando la nacionalidad argentina. Pero, sin embargo, la mayor amenaza continuaban siendo los conflictos desatados por intereses antagónicos alrededor de las cuestiones sociales, desde el momento que los dirigentes conservadores nativos intentaban atraer a la asimilación total a aquellos extranjeros con intereses homólogos, y si expresaban recelo o reproche era frente a su retrimiento o rechazo, mientras que rechazaban o dificultaban las posibilidades de adquisición de la ciudadanía a los estratos socialmente más bajos de la inmigración, tal como podemos encontrar frecuentemente denunciado por los socialistas, quienes hacían activa campaña para que los trabajadores adquirieran la ciudadanía argentina.⁵³ Lugones completará la panoplia ideológica autoritaria con un rechazo furibundo del igualitarismo al que consideraba antinatural, y por lo tanto de la democracia apoyada en tan falso fundamento. La fuerza era el único vector capaz de mantener la cohesión social y evitar su disolución, al imponer una estricta disciplina que obligara a respetar la autoridad jerárquica en todos los ámbitos -económicos, políticos y culturales. Es por ello que mantendrá, durante el período de los primeros gobiernos radicales, que el ejército era "...el último organismo jerárquico que ha sido capaz de escapar de la destrucción de la demagogia" y por lo tanto tenía la misión de reconstruir la sociedad como reflejo de su propia estructura, afirmando que la represión de los extran-

zas armadas de tierra, mar y aire y se aplica la justicia militar. Esta ley dice en su artículo 8º: «Las disposiciones de la presente ley se considerarán parte integrante de la de Defensa Nacional nº 16.970, sin perjuicio de lo que esta prescribe»' (*Electrum*, 2/07/1971), cit. En Jorge Lannot, Adriana Amantea y Eduardo Sguiglia (comps.), *Agustín Tosco. Presente en las luchas de la clase obrera*, Buenos Aires, 1984, pp. 162-166.

53. Cuando Rafael Calzada, destacado dirigente de la Liga Republicana Española en Argentina y muy vinculado a los círculos más conspicuos de la oligarquía argentina, es electo como representante en el Parlamento español en 1907, la prensa argentina destaca con amargura su desafección por el país ya que Dardo Rocha, fundador de la ciudad de La Plata, le había ofrecido un escaño de diputado que aquel había rechazado para no tener la obligación de adquirir la nacionalidad argentina '¿Qué defectos de nuestros resortes de asimilación permiten a España reivindicarse uno de sus hijos ja incorporado a la Argentina? [...] Esa abjuración de la patria, susceptible de parecer interesada, que imponemos a quienes deseamos convertir en argentinos patriotas, es lo que produce los «indianos» y lo que ahora proveyó la candidatura de Calzada', citado por Angel Duarte, «La Liga Republicana Española en la Argentina: política y sociabilidad (1903-1907)», *Anuario del IEHS*, Universidad Nacional del Centro (Tandil, provincia de Buenos Aires), 1993, pp. 307-344. Compárese con las denuncias efectuadas por Juan B. Justo en *La Vanguardia* (PSA, Buenos Aires), que era el órgano del Partido Socialista Argentino, 'Los diarios dicen que la Comisión de asuntos constitucionales de la Cámara de Diputados va a proponer que se conceda esa facilidad para obtener la ciudadanía, pero no a todos los extranjeros, sino solamente a los propietarios que sepan leer y escribir [...] Si conceden algo, será, pues, a los propietarios, de quienes poco temen porque no han mostrado hasta ahora inclinación alguna a intervenir en la política del país, y porque no la perturbarían mucho, desde que la política criolla es ante todo una política de propietarios', «La ciudadanía fácil, para los propietarios», 5/10/1901. Para comprobar que la nacionalidad argentina tampoco servía como protección en caso de persecución a militantes obreros, *La Protesta*, «La Ley de Residencia. Un argentino deportado», 15/02/1906.

jeros no correspondía a las características de una guerra civil sino de una guerra nacional.⁵⁴

Las círculos civiles de la elite porteña no se limitaron a formalizar los prejuicios y a dotar a la acción punitiva del estado de una coartada intelectual, sino que parte de sus miembros comenzó a prestar su concurso para la acción junto a las fuerzas armadas y la policía, iniciando un activismo chauvinista que ya registraba antecedentes en las movilizaciones patrióticas promovidas por grupos de comerciantes y empresarios con motivo de la amenaza de guerra con Chile. La celebración del Centenario de la independencia argentina ensombrecida por la amenaza de una nueva huelga general, constituyó la ocasión propicia para que fraguara en el terreno de la acción la conjunción cívico-militar. El atentado con que Simón Radowitsky vengó en la persona del jefe de la policía, Ramón Falcón, la represión de la Semana Roja de 1909, en noviembre de ese año, fue seguido de la enésima instauración del estado de sitio, que se mantuvo hasta enero de 1910. Inmediatamente después de su levantamiento, tanto las federaciones obreras -FORA y CORA (esta última había sustituido a la UGT)- como el partido socialista planearon realizar actos de protesta y movilizaciones con el fin de lograr la derogación de la ley de Residencia y la liberación de los detenidos por razones políticas y sindicales durante su vigencia. Según la CORA las movilizaciones debían culminar con una huelga general que coincidiría con las imponentes celebraciones oficiales previstas para el 25 de mayo de 1910, aniversario de la independencia, a las que acudirían representantes de gobiernos americanos y europeos de alto rango. El 8 de mayo una gigantesca manifestación obrera -compuesta por más de 50.000 asistentes- convocada por los anarquistas, decidió a la FORA a sumarse a la convocatoria de huelga general, mientras los socialistas se mostraban en desacuerdo con la medida. El gobierno se adelantó a la convocatoria reimplantando el estado de sitio a partir del 14 de mayo, precipitando así el desencadenamiento de la huelga, que se inició dos días después. Esta fracasó en gran parte por la represión desatada que cerró locales sindicales y deportó a numerosos militantes obreros.⁵⁵ En los ataques a los locales de las sociedades de resistencia participaron jóvenes de la burguesía porteña cumpliendo el papel de guardias blancas bajo la coordinación del general Dellepiane, jefe de la policía, y la participación de diputados conservadores como Juan Balestra, Pedro Luro, Carlos Carlés (hermano de quien más tarde sería fundador de la Liga Patriótica Argentina), y un aristócrata de origen italiano, yerno de Julio Roca y futuro fundador de una rama argentina del fascismo italiano, el barón Demarchi.⁵⁶ Entre los desmanes se contó el

54. David Rock, «Precursors of conservative nationalism in Argentina», *Hispanic American Historical Review*, 67:2, mayo 1987, 271-300, pp. 274-275.

55. Incluso, como triste anticipo de los hechos que se producirían 66 años después, se produjo el secuestro por la policía uruguaya de un militante anarquista que había buscado refugio en Montevideo, quien fue conducido clandestinamente a Buenos Aires y entregado a la policía argentina, *La Protesta*, «Un secuestro», 23/05/1910; al tiempo que se instalaban apresuradamente centros de reclusión en locales municipales y en barcos surtos en el puerto. *La Protesta*, «En el Montjuich argentino», 23 y 27/05/1910.

56. Sandra McGee Deutsch, *Counterrevolution in Argentina, 1900-1932. The Argentine Patriotic League*, University of Nebraska Press, 1986, pp. 36-37.

asalto y destrucción de las sedes de *La Vanguardia* (órgano central del partido socialista), *La Protesta* y *La Batalla* -estos dos últimos anarquistas-.⁵⁷ Las acciones expresaron en toda su crudeza la combinación del antiobrerismo y la xenofobia que alimentaba la ideología ultra derechista cuya evolución hemos esbozado, como muestra esta denuncia de la edición montevideana de *La Protesta*

"...no ha sido únicamente contra el anarquismo que se ha atropellado, pero también contra el socialismo, las organizaciones obreras y contra los periódicos anticlericales. Esto en el sentido corporativo. Descendiendo al individual, el fenómeno adquiere caracteres más alarmantes: la patota estudiantil, un grupo de diputados y policías, han asaltado por dos noches consecutivas los *conventillos*, *casas* y *negocios* de israelitas, cometiéndose con ellos toda clase de tropelías. El gobierno haciéndose cómplice de estos hechos salvajes, ha prohibido la entrada de 500 inmigrantes israelitas que llegaron en estos días, obligándoles á volverse con el mismo barco que vinieron.⁵⁸

El primer gobierno radical: ¿hacia un equilibrio de fuerzas? 1916-1922

Si bien la dureza de los enfrentamientos sociales urbanos cesó después de la extraordinaria represión que siguió al Centenario, la elite dirigente, alentada por el nuevo auge que experimentaba la economía argentina en ese cambio de década y ante la certeza no sólo de la continuidad de la inmigración, sino de su incremento durante la segunda década del siglo, consideró la posibilidad de establecer una relación menos conflictiva entre el grupo dirigente tradicional y los sectores sociales subalternos basado en una participación electoral masiva que por su limpieza y garantías permitiera un sólido apoyo al proyecto agroexportador, creando la ilusión que existían posibilidades de participar en los frutos del crecimiento que podría traducirse en la constitución de un gran partido conservador con una amplia base de masas. La reanudación de la exportaciones, inversiones extranjeras e inmigración en la década había consolidado a un espeso estrato de clases medias que pujaba por ascender socialmente en el ámbito de las profesiones liberales y de las pequeñas y medianas empresas secundarias y terciarias. En ese proyecto del sector de la elite opuesto al continuismo roquista que había ocupado la presidencia de la república con Figueroa Alcorta (1904-1910), está el origen de la reforma electoral de 1912, destinada a acabar con el fraude mediante el mejoramiento del registro de electores y la instauración del voto secreto. Y en el mismo sentido puede interpretarse el surgimiento de una incipiente actitud arbitral por parte del gobierno en los conflictos laborales a través del Departamento Nacional del Trabajo, creado en 1907, aunque siempre subordinada a las presiones de los exportadores, compañías ferroviarias y de la industria cárnica (*frigoríficos*) -controladas por capitales británicos y norteamericanos, respectivamente, quienes exigían la

57. El día anterior a la implantación del estado de sitio habían sido detenidos todos los miembros de las redacciones de *La Protesta*, *La Batalla* y *La Acción Socialista* (éste último de orientación sindicalista revolucionaria), Sebastián Marotta, *El movimiento sindical argentino*, Buenos Aires, Ediciones Lacio, 1961, Tomo II, p. 72.

58. *La Protesta*, «La Reacción en Auge», 25/05/1910. También pueden encontrarse relatos similares en Eduardo Gilimón, *Hechos y Comentarios*, Buenos Aires, 1911.

represión lisa y llana del movimiento obrero y rechazaban el reconocimiento de las organizaciones sindicales.⁵⁹

De la reforma electoral de 1912 surgió el triunfo de la Unión Cívica Radical, que por su carácter policlasista y el apoyo que obtuvo de las clases medias urbanas y rurales y de parte de la clase obrera, se apartaba del perfil político del PAN. Sin embargo la reforma electoral no fue pensada por la oligarquía como una posibilidad sincera de ampliar el marco de participación a otras fuerzas políticas que representaran a intereses distintos a los de la elite tradicional.⁶⁰ Por lo tanto el triunfo de Yrigoyen y la UCR -que en realidad sólo se tradujo en conseguir la presidencia de la república, ya que hasta 1918 no adquirirían los radicales la mayoría en la Cámara de Diputados- no fue considerado por los círculos tradicionales como un éxito de la operación impulsada por el reformismo conservador de Roque Sáenz Peña, sino una peligrosa invasión de las instituciones del estado, largamente monopolizadas por la elite, por sectores de la sociedad que de este modo quedaban momentáneamente fuera de su control. Efectivamente, el triunfo yrigoyenista pareció ser la señal para el desencadenamiento de una sucesión de movimientos reivindicativos, después de la pasividad observada por el movimiento obrero como consecuencia de la gran represión y la aplicación del estado de sitio en 1910 que había significado la deportación de numerosos activistas obreros, que afectaron principalmente, no a las pequeñas industrias artesanales -como había sido lo habitual hasta ese momento- sino a los ferrocarriles, los trabajadores del cabotaje fluvial, los portuarios y los obreros de los frigoríficos.

En 1918 la inflación encareció notablemente los bienes de consumo populares, tanto los que dependían de la importación, como los alimentarios, al reanudarse la demanda exterior procedente de los países beligerantes, favoreciendo a los productores agropecuarios pero irritando a los asalariados urbanos que veían como se agudizaba el deterioro de su nivel de vida que venían padeciendo desde la crisis de 1913 y el comienzo de la Primera Guerra Mundial.⁶¹ En diciembre de 1918 se inició un conflicto en una fábrica metalúrgica de notables dimensiones para Argentina en esa época -Talleres Vasena- al rechazar el propietario las demandas de sus obreros, quien utilizó fuerzas policiales para proteger a los esquiroleros que

59. Ver sobre la doble actividad estatal, represiva y conciliadora, en la primera década del siglo, A. Andreassi, *Movimiento huelguístico y socialismo en Argentina. Buenos Aires (1895-1910)*, tesis doctoral Universidad Autónoma de Barcelona, 1994.

60. Para D. Rock el radicalismo era una suerte de partido demócrata conservador o un movimiento de masas conducido por grupos pertenecientes a las clases altas, en lugar de un movimiento popular animado por sus bases. Unía los intereses de las élites a las reivindicaciones de las clases medias y asalariadas de cierta cualificación, que habían crecido con la inmigración, así como con los propietarios agrícolas que ocupaban una posición subalterna frente a los grandes terratenientes y tenía buenos vínculos con la Iglesia. Su principal punto débil era su escasa influencia en el ejército, controlado por la elite conservadora, *El radicalismo argentino, 1890-1930*, Buenos Aires, Amorrortu Editores, 1977, pp. 71-77; lo que podría explicar su éxito electoral en el que, paradójicamente, conseguían llevar a cabo el proyecto que los herederos del PAN habían diseñado para perpetuarse en el poder político.

61. En 1918 el salario real estaba su nivel más bajo desde 1914, mientras que el volumen de la producción industrial había superado el alcanzado al comienzo de la guerra, David Rock, *El radicalismo argentino, 1890-1930*, op. cit., p. 169.

pretendían reemplazar a los huelguistas. Se radicalizó el 7 de enero de 1919, al producirse un enfrentamiento armado con la policía en el que perdieron la vida cuatro obreros. El Consejo Federal de la FORA sindicalista (IXº Congreso) intentaba mediar para poner fin al conflicto, que fue aceptada por el gobierno radical, fiel a su táctica de negociación con los sindicatos cuando ésta servía para ampliar su base de apoyo electoral, consiguiéndose un acuerdo para finalizar el conflicto de los talleres "Vasena".⁶² Sin embargo esto no impidió que progresivamente los obreros de las industrias próximas comenzaran a adherirse a la huelga, la que se complicó por la entrada en la misma de obreros de las empresas de tranvías y portuarios de Buenos Aires con objetivos propios, transformándose el 9 de enero en una huelga general que conmovería a Buenos Aires.

Rápidamente creció en los círculos políticos conservadores y radicales y en los medios de opinión la tendencia a establecer analogías entre estos acontecimientos y los sucesos de la Revolución Rusa. Sin embargo esta reacción, que una vez más da cuenta de la ola de temor que la Revolución de Octubre produjo en las burguesías de muchos países, fue rápidamente aderezada con la propia tradición ideológica reaccionaria al aparecer los clásicos rasgos xenófobos, ya evidenciados en la década anterior. E inmediatamente reclamaron la intervención del ejército para hacer frente a lo que suponían una peligrosa asonada revolucionaria, capaz de conducir al país a su "bolchevización". La ocupación de Buenos Aires con unidades del ejército al mando del general Dellepiane sugiere que éste intervino con una, por lo menos, sospechosa autonomía respecto de las intenciones de Hipólito Yrigoyen sobre como afrontar la crisis, ya que Sebastián Marotta -testigo excepcional de los acontecimientos en su calidad de secretario general de la FORA sindicalista- relata la rapidez con que se llegó a un acuerdo entre la federación sindical y el gobierno para resolver los conflictos de los talleres "Vasena" y de los obreros portuarios encuadrados en la FOM.⁶³ En todo caso, como afirma David Rock, la acción de Dellepiane obligó al gobierno a inclinarse por el apoyo total a la represión después del 9 de enero, ante el temor de que ese general hubiese decidido cruzar "su Rubicón".⁶⁴ Ello pone en duda, por lo menos, la afirmación de otros autores que consideran que la orden de reprimir y ocupar militarmente la ciudad procedía directamente del gobierno y que el ejército sólo se había limitado a cumplir órdenes recibidas. La actitud del gobierno radical en el curso de las huelgas de 1917 y 1918 demuestra que si en esos conflictos tenía un papel protagónico la FORA sindicalista, la conducta habitual era la de favorecer la negociación en lugar de la represión a los huelguistas.⁶⁵

62. La UCR no mantenía una línea de apoyo incondicional a la mediación en los conflictos laborales, sólo favorecía la negociación cuando los obreros implicados significaban un caudal electoral que compensaba el desaire que la mediación gubernamental infligía a los empresarios afectados, un ejemplo de ello fue la huelga de la industria cárnica de Berisso (localidad próxima a La Plata), a fines de 1917, o las huelgas ferroviarias en agosto de 1917 y abril de 1918, en la que retaceó su mediación y en cambio favoreció el envío de tropas, donde la mayoría de los trabajadores eran inmigrantes, y por lo tanto desprovistos de derechos políticos, D. Rock, *El radicalismo argentino, 1890-1930*, op. cit., pp. 291-293 y 296.

63. S. Marotta, *El movimiento sindical argentino*, op. cit., p. 244.

64. D. Rock, *El radicalismo argentino, 1890-1930*, op. cit., p. 185.

65. D. Rock, *El radicalismo argentino, 1890-1930*, op. cit., pp. 290-295.

Estos sucesos revelan que desde la constitución del primer gobierno radical se estaba produciendo un giro, al principio no demasiado perceptible, en la relación entre las instituciones políticas estatales, los grupos dirigentes ligados a la elite dominante y las fuerzas armadas, ya que hasta 1915, la participación del ejército, incluso como "policía laboral" se había realizado en el marco de decisiones emanadas de los sucesivos gobiernos oligárquicos, cumpliendo un papel instrumental de decisiones de mandatarios civiles.⁶⁶ En primer término cambia la actitud de los principales propietarios agrícolas y empresarios vinculados a las industrias exportadoras con respecto a la confianza que depositan en las autoridades políticas para la defensa de sus intereses que consideran gravemente amenazados por la creciente conflictividad obrera, que no es siempre afrontada por el gobierno radical con la suficiente energía.⁶⁷ La Sociedad Rural Argentina será la principal impulsora de la Asociación Nacional del Trabajo, constituida en 1918, en un claro intento de crear una sólida coordinación de empresarios que permitiera enfrentar mediante la coordinación de lock-outs y el reclutamiento de esquirolas la conflictividad laboral, que al producirse en frigoríficos, portuarios y ferroviarios afectaba indirecta pero contundentemente los intereses agroexportadores, al tiempo que actuaría como organismo de presión frente a un gobierno, como el de Hipólito Yrigoyen, con una propensión evidente hacia la conciliación y negociación con los sindicatos, como sucedió con las huelgas que se produjeron en los frigoríficos próximos a Buenos Aires durante 1917 y 1918.⁶⁸ Simultáneamente se observa la consolidación de la Liga Patriótica Argentina -fundada el 19 de enero de 1919, bajo la presidencia del contralmirante Domecq García-, como organización que formula el rechazo de las clases propietarias a la actuación del movimiento obrero, caracterizada por la conjunción de antisocialismo, xenofobia -con un específico componente antisemita-, tradicionalismo católico y un profundo desprecio por la democracia de

66. Discrepo totalmente con la afirmación de Alain Rouquié quien opina que el distanciamiento de los altos mandos del ejército del gobierno radical se debió a que éste les había encargado tareas propias de la policía que iban en desmedro de la honorabilidad de los objetivos de las fuerzas armadas, ya que hasta la presidencia de Victorino de La Plaza no habían tenido problemas en realizarlas; cfr. A. Rouquié, *Poder Militar y Sociedad Política en la Argentina*, op. Cit., pp. 149-150.

67. D. Rock plantea con acierto que el radicalismo no tenía una postura definitivamente pro obrerista, pero que era extremadamente sensible al apoyo electoral que podía obtener de diversos sectores sociales, excluidos del juego electoral hasta la reforma de Sáenz Peña en 1912; y observa que el gobierno era capaz de respuestas diversas -conciliadoras o represivas- frente a diferentes conflictos laborales en función de la rentabilidad electoral que los obreros implicados podía otorgarle, lo que evidentemente no coincidía, por lo menos siempre, con las necesidades empresariales que no toleraban estas «dudas» políticas que interpretaban como debilidad gubernamental a la hora de defender sus intereses de manera similar a como lo habían realizado los sucesivos gobiernos del P.A.N., *El radicalismo argentino...*, op. cit., pp. 138-166.

68. David Rock, *El radicalismo argentino, 1890-1930*, op. cit., pp. 288-293. Es un dato significativo que confirma las relaciones de poder entre los diferentes sectores patronales argentinos que el patrocinio de la Asociación Nacional del Trabajo lo tuviera una entidad formada por los productores agropecuarios, y no la Unión Industrial Argentina -a pesar de los vínculos de intereses comerciales y políticos que existían entre los miembros de ambas organizaciones-, lo cual demuestra que además del interés por mantener incólumes los mecanismos de exportación amenazados por las huelgas ferroviarias y portuarias, la Sociedad Rural intentaba dominar la totalidad del mercado de trabajo, incluso sobre aquellos sectores de trabajadores con los que se no se enfrentaba directamente en el terreno del conflicto laboral.

masas, fortalecida por el activismo de grupos paramilitares integrados por miembros de las clases altas y medias colaborando en la represión efectuada por la policía y el ejército durante la huelga general comenzada el 9 de enero de 1919. Institucionaliza el carácter clasista que habían ostentado tanto las intervenciones de jóvenes de las clases altas en sus ataques a locales obreros junto a la policía y el ejército, a fines de la primera década, así como provee de una organización donde puede volcarse la ideología xenófoba y antisocialista que se había manifestado en los círculos culturales en el período del cambio de siglo.⁶⁹ Estas "guardias blancas", armadas y entrenadas por oficiales del ejército centran sus atentados especialmente sobre emigrantes rusos de religión judía y catalanes (a los que asociaban generalmente con el anarquismo), con un patrón que mezcla el origen nacional y la ideología política de las víctimas -todas identificadas como "peligrosos agitadores" al servicio de una intentona obrera revolucionaria destinada a instaurar en Argentina un régimen bolchevique. En realidad muestran estas expresiones una continuidad con acontecimientos que hemos relatado. El conflicto de límites con Chile, a final de siglo, con la constitución de grupos de exaltados que invocaban el apoyo de la ciudadanía al ejército que debía defender al país frente a la agresión extranjera, y que rápidamente trasladaron el eje del conflicto hacia el interior al considerar que las reclamaciones y protestas obreras debilitaban la capacidad de la república en una hipotética guerra, argumento que apoyaban numerosos oficiales en activo, destacándose por su virulencia antisocialista el general Félix Uriburu, quien protagonizaría el golpe de estado contra el gobierno de Hipólito Yrigoyen del 6 de septiembre de 1930. Y durante 1910, con de la instauración por enésima vez del estado de sitio para impedir la realización de la huelga general convocada para el aniversario de la independencia nacional.

Con su constitución en 1919, un mes después del final de la *Semana Trágica*, La Liga Patriótica Argentina se presentaba como una formación política novedosa en su aspecto organizativo por su gran activismo, pero ideológicamente ligada a los intereses de la clase dominante y a los temores de las clases medias, con rasgos que evocan a los movimientos fascistas europeos.⁷⁰ Característicamente esta

69. En este punto debo manifestar mi desacuerdo con las afirmaciones de David Rock, quien por otra parte ha realizado un exhaustivo estudio del radicalismo y la acción de las corrientes de extrema derecha durante el primer gobierno de Yrigoyen, ya que este autor considera que la Liga Patriótica se diferencia de los movimientos nativistas o nacionalistas anteriores no sólo por su organización paramilitar, sino por su carácter clasista a diferencia de aquellos preocupados por el rechazo a la inmigración en bloque, sin efectuar distinciones entre categorías sociales. Como hemos visto, a lo largo de párrafos anteriores, la xenofobia adquirió rápidamente un carácter antiobrero mucho antes de la fundación de la Liga patriótica. En todo caso se diferencia por la capacidad de reunir y organizar conjuntamente a elementos civiles y militares, pero su ideología no ofrece solución de continuidad con el hilo conductor que arranca de Martel, pasando por Gálvez y por supuesto Leopoldo Lugones, cfr. *El radicalismo argentino, 1890-1930*, op. cit., pp. 187-188.

70. Sobre la similitud de la Liga Patriótica Argentina con los movimientos fascistas, especialmente con el italiano, y los rastros ideológicos que es posible discernir en los cuadros dirigentes de la dictadura militar de 1976-83, ver Sandra McGee Deutsch, *Counterrevolution in Argentina, 1900-1932*, op. cit., especialmente pp. 225-241. Las referencias al acoso a que se encuentran sometidos permanentemente los estratos medios de la sociedad frente a la actividad del capital y trabajo, que insolidariamente persiguen colisionando sus propios intereses sin reparar en el interés global son

organización contó entre sus filas a prominentes jefes y oficiales de las fuerzas armadas, abarcando más de la mitad de la oficialidad en activo, y probablemente canalizó el activismo militar que se había insinuado en las propuestas golpistas que comenzaron a despuntar en fecha tan temprana como 1916, apenas asumida la presidencia por Hipólito Yrigoyen. Ello revela que la presión sobre el gobierno de la Unión Cívica Radical ya venía determinada porque la elite tradicional no se resignaba a la pérdida del control directo del poder político, y que la actitud de Yrigoyen respecto a las relaciones con el movimiento obrero no haría más que agravar.⁷¹

Este doble proceso, la constitución de la Asociación Nacional del Trabajo y la Liga Patriótica, delata la constitución de un nuevo bloque político conservador diferenciado del antiguo P.A.N. De éste recoge principalmente su prolongada fase de gobierno como el referente mítico al que la sociedad argentina debe retornar, pero simultáneamente señala como obstáculos para esa restauración lo que son consecuencias de los gobiernos autonomistas: la exagerada y permisiva inmigración -que ha sido incapaz de garantizar la arribada a Argentina de aquellos pueblos europeos que el propio proyecto oligárquico consideraba deseable- y ha colmado al país con una mano de obra poco cualificada e indisciplinada, y la ampliación de la participación democrática que ha implicado la pérdida del poder político por el propio partido conservador. Por otra parte revela una preocupación por organizar y encauzar de modo autónomo la resistencia patronal a las demandas obreras e incluso un encuadramiento de los trabajadores que pueda ser controlado por propietarios y empresarios. Sin renunciar -por supuesto- a recabar la intervención del estado en su apoyo en los conflictos laborales y sociales. Por otra parte esta nueva alineación no se plantea la reconquista del poder político por las urnas acatando las reglas del juego vigentes, sino que considera consustancial con sus objetivos una alianza cada vez más estrecha con las fuerzas armadas, el único sector del estado que continuaba identificado con el período precedente e imper-

referencias comunes en los documentos de la Liga, que revelan una presencia de cierta importancia de grupos de la pequeña burguesía en sus filas, que aportan a la organización el referente -persistente hasta nuestros días- de una sociedad cuyas pretensiones mesocráticas se fundan en el mito de su modernización y homologación a los países europeos más avanzados, así como a las democracias agrarias de Australia y Nueva Zelanda, durante la etapa agroexportadora, ver D. Rock, *El radicalismo argentino, 1890-1930*, op. cit., p. 189. Una vez producido el primer gran temblor del suelo en el que se apoyaba esa mentalidad, con la crisis de 1930, vemos el reverso de esa creencia en el papel dinámico y el futuro merecido de esa clase media, en la literatura de los años treinta y cuarenta en autores como Roberto Arlt o Ezequiel Martínez Estrada, donde los personajes se mueven entre la desesperación y el escepticismo frente al hundimiento de un modelo del que se creían con derecho a disfrutar, una grieta que sólo reparará en parte y por algún tiempo sólo la experiencia del primer período peronista.

71. Según S. McGee, formaban parte de ella 6 generales, 18 coroneles, 32 teniente-coroneles, 50 mayores, 212 capitanes, 300 tenientes y más de 400 subtenientes, sólo del arma de tierra, *Counterrevolution in Argentina, 1900-1932*, op. cit., p. 100. Y debe tenerse en cuenta que según estimaciones, en 1907 la totalidad de oficiales en activo era de 1.300, A. Rouquié, *Poder militar y sociedad política en...*, op. cit., Tomo I, p. 152. Respecto a los intentos de golpe de estado contra el primer gobierno radical, ver también A. Rouquié, *Poder militar y sociedad política en...*, op. cit., Tomo I, pp. 158-159 y D. Rock, *El radicalismo argentino, 1890-1930*, op. cit., pp. 181-186. Según este último autor la Liga Patriótica también recibía apoyo financiero de las principales empresas extranjeras, y en primer término las ferroviarias.

meable a cualquier contaminación populista, porque su conducción no dependía de los avatares democráticos. Al contrario, una clase empresarial tan dependiente del control monopólico del estado para la buena marcha de sus negocios no podía dejar librada la reconquista del poder político a la suerte en las urnas cuando crecía entre sus filas la incertidumbre sobre las posibilidades de desarrollo de un partido de masas. De ahí que la intervención de las fuerzas armadas fuera repetidamente solicitada para que interviniera en las huelgas que se produjeron durante el período de la guerra e inmediatamente posterior a ella. La represión dirigida por el coronel Héctor Varela y el capitán Elbio Anaya de las huelgas de los peones agrícolas de la Patagonia de 1921-1922, que incluyó el fusilamiento en masa, es un ejemplo de como no habían acabado con los sucesos de la Semana Trágica los forcejeos entre Yrigoyen y la derecha conservadora parapetada detrás de la Sociedad Rural, la Liga Patriótica y el ejército.⁷²

A modo de conclusión

Es por ello necesario que, de modo sumario, volvamos a recuperar los antecedentes y tendencias que desde larga data otorgaron al ejército argentino un papel decisivo en la política interna y convirtieron al "enemigo" interior en el principal objetivo de su quehacer castrense. En este momento, en que asistimos a una revisión y cuestionamiento -a nivel planetario- de los principios que constituyeron el acervo principal de las fuerzas sociales y políticas progresistas y que cristalizaron en los intentos de amortiguar y corregir los efectos del funcionamiento de una economía capitalista cada vez más articulada internacionalmente, mediante políticas redistributivas a favor del sector asalariado controladas directamente por el estado, así como una ofensiva política y económica contra la supervivencia del Estado de Bienestar surgido con mayor o menor grado de solidez en Europa y algunos países latinoamericanos después de la Segunda Guerra Mundial, cabe reflexionar sobre la naturaleza específica que adoptó ese ataque contra una política que, de grado o por fuerza, trataba de responder a las necesidades de los sectores sociales subalternos y especialmente a los asalariados urbanos y rurales. Pretendemos afirmar que más allá de la autojustificación de los militares para interrumpir violentamente el decurso democrático, la dictadura militar fue la forma específica con que se reanudó en Argentina una política de ajuste neoliberal con el fin de restablecer regresivamente las condiciones de una nueva fase de acumulación a favor de los sectores más concentrados de las clases propietarias, que se veía obstaculizada por mecanismos institucionales y sociales vigentes desde fines de la década de

72. Osvaldo Bayer, en su magistral descripción del conflicto patagónico *Los vengadores de la Patagonia trágica*, Buenos Aires, Editorial Galerna, 1974, menciona la utilización sistemática del ejército en otras provincias, a partir de 1919, para reprimir la ola de huelgas que estalla en el ámbito agrícola, el cual había permanecido al margen de la conflictividad laboral habitual anterior a 1914, pp. 46-48. Para la intervención de la Liga patriótica en las huelgas de jornaleros del área cerealera organizando grupos represivos y de esquiroleros, ver S. McGee Deutsch, *Counterrevolution in Argentina, 1900-1932*, op. cit., pp. 127-142.

1940. Su especificidad no implica originalidad, ya que la dictadura de 1976 se produjo en el marco simultáneo de la instauración de otros regímenes dictatoriales en el Cono Sur con similares objetivos, en una escala continental sin precedentes. La prolongada vigencia de una concepción militarista de la lucha política, era producto no sólo del carácter concentrado del ingreso y el poder político en un sector de las clases propietarias -que a su vez constituía el núcleo más dinámico de un capitalismo argentino basado en la agroexportación y en la vinculación estrecha con mercados y capitales internacionales- sino también de la dependencia que tenía esa elite del control y utilización monopólica del estado, sin competidores de ninguna clase, para poder controlar las "externalidades" tributarias, monetarias y de relaciones internacionales, sin las cuales su modelo de acumulación era inviable. Paradójicamente, la apoteosis liberal que alumbró la modernización argentina en el último cuarto del XIX, no podía mantenerse sin la "estatización" de las relaciones políticas y económicas, en las cuales el papel que le cupo al ejército era el de sustituto de la incapacidad del proyecto conservador de mantenerse en el poder con el consenso popular, así hasta nuestros días.